

—Suficientemente apoyada esta moción, se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Se votará si se aprueba ó no el proyecto de resolución, presentado por el señor Diputado por la Capital, Dr. Navarro Viola.

—Se vota y resulta negativa de 27 votos contra 20.

ORDEN DEL DIA

EDUCACION COMUN

Capítulo V. «Tesoro comun de las escuelas.—Fondo escolar permanente.»

Sr. Figueroa (F. C.)—Creo que debe votarse inciso por inciso, leyéndose ahora todo el artículo.

Sr. Gilbert—Tengo que hacer observaciones á varios de estos incisos y no quisiera estar renovando la discusion en cada uno de ellos, puesto que son de la misma naturaleza, porque forman el tesoro comun de las escuelas, y quisiera hablar de una vez sobre todos ellos, á fin de no estar molestando la atencion de la Cámara.

Sr. Presidente—¿Aceptaria el señor Diputado que se diera lectura de todos los incisos, para despues votar los que él indique?

Sr. Gilbert—Sí, señor.

—Se dá lectura del artículo 42.

Sr. Gilbert—Voy á empezar señor Presidente, por el inciso 1º del artículo en discusion.

Creo que hay conveniencia, y esto responde á una buena administracion, en que tratemos de dirigir la inversion de la renta pública, de manera que proporcione medidas fáciles de administracion.

Tenemos que el establecimiento de la Capital definitiva de la República, la adquisicion de nuevos territorios nacionales, han venido á presentarnos una nueva faz de administracion, en que hay conveniencia en que todos los pasos que demos sean tendentes al arreglo de la administracion de la Capital y de esos territorios nacionales.

Estamos discutiendo una ley de educacion que vá á rejir en la Capital de la República y en los territorios nacionales.

Opino que debemos tratar de que la Capital de la República se sostenga satisfaciendo todas sus necesidades con la renta que ella produce, de manera que la administracion se facilite en esta parte y podamos poner el Tesoro General, que está llamado á satisfacer las necesidades de toda la República, en una corriente distinta y conveniente, y que, como digo, responda á la buena administracion del país.

Por el inciso 1º, veo que se proyecta destinar un cincuenta por ciento de la venta de

tierras públicas, para formar el tesoro comun de las escuelas, y al mismo tiempo se deja subsistente una parte de la contribucion directa, por ejemplo, que produce la Capital, para destinarla á otros fines de administracion que son de carácter general.

Creo de acuerdo con la idea que acabo de manifestar, que debemos tratar de que todos esos impuestos que pagan los habitantes de la Capital de la República, sea en forma de contribucion directa, ó sea en forma de impuestos de tal ó cual clase, se destinen para satisfacer las necesidades de este primer centro de poblacion de la República tratando tambien que desde ya alcance la Capital, con sus rentas propias, á atender sus servicios municipales, sus escuelas, sus cárceles, etc.

De esta manera me parece que armonizaríamos mejor esta parte de la administracion; mucho mas si se tiene en cuenta que los territorios nacionales, deben tener tambien su cuerpo legislativo, que debe dictar sus medidas para la localidad, y que hay conveniencia que tengan tambien sus recursos inmediatos y especiales por decirlo así, para esas necesidades, especiales tambien.

Debemos tratar de enagenar las tierras nacionales, para mejorar sus condiciones; para poner ahí ferro-carriles, afectando su producido á los empréstitos que se hagan con ese objeto; para poblarlas, para cultivarlas; en una palabra, para hacerlas cambiar de aspecto, convirtiéndolas en centros de civilizacion.

Esto no importa imprimir un sello de localismo á las cosas, sino que es una buena regla de administracion que facilitaria la contabilidad del país.

Ahora mismo tenemos varios proyectos de ferro-carriles que se piensa establecer en esos territorios nacionales; tenemos empresas de navegacion que tratan de ir á los puertos de nuestras costas no pobladas.

Entonces, pues, lo mas oportuno seria hacer producir esos territorios, de manera que atiendan ellos mismos á sus necesidades, dejando á la Capital sus rentas propias.

Como no tengo el propósito de disminuir los elementos que se quiere dar, me voy á permitir proponer la supresion del inciso 1º, en la forma en que está, y poner el inciso 3º como 1º diciendo: Inciso 1º: La contribucion directa de la Capital, de los territorios y de las colonias nacionales.» De esta manera, tendríamos toda la contribucion directa de la Capital para formar el fondo comun de las escuelas.

Esto en cuanto á los incisos 1º y 3º. En cuanto al inciso 10 tambien voy á permitirme hacer una observacion, tendente á pedir su supresion.

Dice: »El cinco por ciento de toda suce-

sion entre colaterales, con escepcion de hermanos »

Creo que este inciso debe ser suprimido de la ley, puesto que, segun mi opinion, él importa arrebatar la propiedad privada de los individuos en una forma que no es la establecida por nuestras leyes, ni por la Constitucion. Preyengo, para que no se me haga el argumento, que yo no voy á sostener que la Cámara no tiene facultad de dictar leyes, con esta ocasion, que pueden modificar las disposiciones de nuestro Código Civil. Sin embargo, ahora voy á traer, como corroboracion de mis ideas, las disposiciones del Código Civil sobre esta materia, y tambien las disposiciones de la Constitucion sobre la misma.

Por nuestra Constitucion se establece que todo habitante de la República es dueño de disponer de su propiedad, en la forma que crea mas conveniente, y que nadie puede ser privado de ella, sino por causa de utilidad pública, previa indemnizacion de su justo precio. En este caso se priva á los verdaderos y legítimos tenedores de una cosa, sin ningun género de remuneracion, y sin ninguna razon legítima ni útil tampoco, dire así, de que puedan disponer libremente de su propiedad.

Todo habitante de la República puede ser perfectamente constituido en propietario de una cosa, por medio de un testamento, como lo establece nuestra legislacion civil; en este caso está reconocido ya como heredero, en los términos que lo establece uno de los artículos respecto á las sucesiones entre parientes, que incluye á todos los parientes, ademas de los hermanos.

Entonces, tenemos que vamos á privar de su propiedad á aquellos que legítimamente la han adquirido, y que legítimamente pueden disponer de ella.

El artículo 1º, título 11, libro 4º del Código Civil, dice: «Toda persona moral ó físicamente capaz de tener una voluntad y de manifestarla, tiene la facultad de disponer de sus bienes por testamento, con arreglo á las disposiciones de este Código, sea bajo el título de institucion de herederos, ó bajo el título de legados, ó bajo cualquier otra denominacion propia para espresar su voluntad.»

Este principio de jurisprudencia no ha sido modificado últimamente por la sancion de las Cámaras nacionales, puesto que lo ha ratificado, cambiando únicamente la primera parte, en esta forma: en lugar de «toda persona moral ó físicamente capaz de tener una voluntad», se ha puesto: *toda persona legalmente capaz de tener voluntad*. Luego el Congreso ha repetido, diré así, el principio, al ocuparse de la correccion del Código.

Por este artículo del Código se vé, pues, que puede cualquier persona disponer de

sus bienes en el sentido que lo he indicado: mientras tanto, se establece, por el inciso 1º del artículo en discusion, un impuesto que importa privar á una persona de una cosa que legítimamente le pertenece, contrariando las disposiciones de la Constitucion y el principio que acabo de indicar, establecido en nuestro Código Civil.

El inciso 11 contiene el mismo inconveniente. Dice:

«El diez por ciento de toda herencia ó legado entre estráños, como de toda institucion á favor del alma ó de establecimientos religiosos, siempre que en los dos incisos anteriores la sucesion exceda de mil pesos moneda nacional y sea abierta en la jurisdiccion de la Capital, territorios y colonias nacionales.»

Este inciso tiene las mismas dificultades legales que el anterior, con una circunstancia agravante que vá hasta despojar á los pobres de las limosnas que les dejan los que mueren; puesto que es seguro que estas disposiciones se aplicaran á los testamentos de las personas, tambien en la parte de los bienes, que dejan para hacer limosnas.

Atenta igualmente, repito, á esa disposicion del Código Civil, cuando dice el inciso: «como toda institucion á favor del alma de establecimientos religiosos, etcétera.»

Como he dicho antes, cada uno es dueño de su propiedad; y en virtud de la facultad que le acuerda la legislacion civil, tiene el derecho de dejarla cuando y como crea conveniente. Y creo que la ley no puede venir á chocar esa voluntad, ni á despojar á aquellos que reciben un beneficio por testamento.

Tenemos esta otra disposicion, en el Código Civil. El artículo 13, título 14, libro 4º dice:

«La institucion de herederos á los pobres, ó al alma del testador, importa, en el primer caso, solo un legado á los pobres de pueblo de su residencia, y en el segundo, la aplicacion que se debe hacer en safragios ó limosnas.»

Luego, pues, dada la disposicion del inciso 10 y la interpretacion que hace el Código Civil á este medio de legar bienes, resulta que tendrá siempre como consecuencia inmediata la privacion de las limosnas á los pobres. Y si yo, como los autores del proyecto, estamos interesados en que haya un fondo comun de escuelas, creo que nuestros deseos no deben ir hasta el extremo de privar á los pobres de las limosnas que se les haga.

Estas son las razones que tengo para pedir las modificaciones que he apuntado; y pido que se vote cada uno de los incisos, para que en oportunidad entren esas modificaciones, si fuese rechazado lo que propone la Comision.

Sr. Demaria—Yo espero que el autor del proyecto en discusion, ha de dar todas las

explicaciones que sean necesarias al señor Diputado, sobre los incisos que se han leído; y á fin de que tenga en cuenta tambien mis observaciones, es que voy á tomar la palabra.

Voy á proponer que se introduzca en este artículo un nuevo inciso, que diga: *El quin-ce por ciento de las rentas y entradas municipales*. Este recurso lo tienen actualmente las escuelas públicas de la Capital, y asi-ciendo á la suma de doscientos cuarenta mil fuertes.

Sr. Leguizamon (O.)—Me parece que el señor Secretario, lo ha leído.

Sr. Presidente—Ha tomado nota de él.

Sr. Leguizamon (O.)—No se ha inclui-do por inadvertencia.

Sr. Demaria—El señor Secretario no ha podido leerlo, porque no está en el pro-yecto.

Sr. Leguizamon (O.)—De todos modos tengo encargo de los señores Diputados que firman conmigo este proyecto, de acep-tar del señor Diputado Demaria esta indica-cion: porque nunca fué nuestro propósito suprimir este recurso, sino, al contrario, in-cluirlo; solamente por inadvertencia al re-dactar el proyecto, se ha eliminado.

Sr. Demaria—No tengo, por mi parte, ninguna otra observacion que hacer.

Sr. Figueroa (F. C.)—Adhiriéndome por completo á las ideas del señor Diputado por Entre-Rios, que ha pedido la supresion del inciso que establece el 50 0/0 del producido de las tierras públicas, declaro que yo tam-bien iba á manifestarme en el mismo sentido combatiendo ese inciso.

Ahora, despues de haber hablado el señor Diputado por Entre-Rios, me limitaré á ob-servar la sustitucion que él ha indicado.

El señor Diputado queria suprimir esta parte y establecer que la totalidad de la con-tribucion directa fuera destinada para las escuelas. Por este medio, señor Presidente, se obtendria el siguiente resultado:—que las rentas de aduana serian absorbidas, en su mayor parte, por los servicios de carácter municipal que hace la Nacion, en la Capital, puesto que el importante recurso de la con-tribucion directa, quedaria suprimido.

Como se sabe, señor Presidente, la Na-cion tiene á su cargo los establecimientos de beneficencia, existentes en esta ciudad y departamento de policia, que gasta 30 ó 36 millones de pesos moneda corriente, que son un millon doscientos mil ó un millon trescientos mil pesos fuertes.

Para sufragar estos gastos, la única en-trada importante que tiene la Nacion en la Capital, es la contribucion directa.

Ahora, si todavia á este recurso que quie-

re dar el señor Diputado para las escuelas, se agrega el 15 0/0 de las patentes de la Capital,—recurso con el que no cuenta la educacion en la actualidad,—se compren-derá que, abandonando tales recursos á la educacion, dejaríamos al Tesoro Nacional sin mas rentas que las de la aduana, para sufragar todos los gastos originados en la Capital.

Respecto al 50 0/0 de la venta de las tierras públicas, debe tenerse en considera-cion lo siguiente: que las tierras públicas de la Nacion son muy estensas, que el recurso que de ellas se obtendria seria considerable, siendo cada vez mas importante para el porvenir.

Téngase presente, por consiguiente, que importando esas tierras un valor que no ba-ja de treinta á cuarenta millones de pataco-nes, no es propio deshacerse de la mitad de esta suma, para entregársela á las es-cuelas.

Por estas razones, pienso que, tratándose de un recurso especial, como es el de la venta de las tierras públicas, debemos dejar-lo mas bien para fomentar la colonizacion ó para construir ferro-carriles, cosas de evi-dente utilidad y que para nuestro pais tienen un carácter de necesidad imprescindible, que no podemos perder de vista ni por un momento.

Sr. Leguizamon (O.)—Pido la palabra.

Sr. Bouquet—Pido la palabra.

Sr. Leguizamon (O.)—¿La pide el se-ñor Diputado para hablar en el mismo sen-tido de las observaciones hechas por los señores Diputados por Entre-Rios y Cata-marca?

Sr. Bouquet—Sí, señor.

Sr. Leguizamon (O.)—En ese caso le dejo la palabra, para contestar despues á los tres.

Sr. Bouquet—Perfectamente.

Señor Presidente: me parece que no de-bemos hacer para las escuelas una situacion tan exesivamente privilegiada.

Desde luego, si bien convengo en que se les dé todas las rentas necesarias para que subsistan, debo hacer notar que se trata aquí de destinar un fondo general para una administracion especial, hecho que no se justifica, por cierto, en un país que paga religiosamente todos sus servicios públicos.

Si es conveniente, si es necesario educar, es bueno y conveniente pagar los servicios indispensables á la vida social. Por consi-guiente, todos los servicios que tienen por objeto garantizar la vida, la propiedad, asegu-rar la justicia, deben ser tan religiosamente pagados como las escuelas.

Digo esto, señor Presidente, sin que ello-

importe oponerme á la idea en el fondo.

Pero si bien admito la conveniencia de atender la educacion, debo hacer presente que el servicio de esta debe solo tener destinada la renta que necesite, nó una renta exajerada.

Así, pues, me parece que cuando tratamos de votar fondos para escuelas, debemos saber cuales son los gastos que ellas tienen.

Creo que el hecho se puede constatar. Sabemos, segun esta memoria, el número de niños que hay que educar en el Municipio de la Capital. Se sabe perfectamente esto, y por consiguiente, se puede calcular la cantidad que importará el sostenimiento de las escuelas.

Veo aquí, por la memoria que acaba de publicar la Direccion de la Educacion Comun, que se ha gastado al año quinientos trece mil pesos fuertes en la educacion, y que el producido de las entradas ha sido de seiscientos cincuenta mil pesos fuertes.

Las contribuciones que se destinan por este proyecto, indudablemente representan mas que el doble ó triple, tal vez, de la suma necesaria; y es por este motivo que he dicho que no debe quedar esta reparticion con recursos exesivos, dejando á las demas con deficiencias.

Veo, por ejemplo, destinados por el articulo en discusion los siguientes recursos, (además del 50 o/o de la venta de las tierras públicas), que calcularé segun los datos que tengo:

50 o/o de los depósitos judiciales. pf. 50000
40 id. de la contribucion directa

de la Capital. « 400000

15 o/o de las patentes. « 90000

15 id. que dá la Municipalidad. . . « 200000

(Advirtiend que este último recurso ha producido 215,000 y pico de pesos fuertes.)

Estas solas partidas importan 740,000 ps. fuertes.

Viene despues otro gran número de recursos, que me abstengo de enumerar.

Resulta, entonces, que las escuelas tendran para atender sus gastos no menos de 740,000 pfs.

Seria un recurso mas que suficiente.

Ahora, si se agregara todavia el 50 o/o de la venta de las tierras públicas, ¿á cuanto subiria la suma? No puedo saberla precisamente, pero sí calcularla mas ó menos.

La Nacion tiene cuarenta ó cincuenta mil leguas de tierras públicas. La ley de tierras autoriza á vender mil leguas anuales; y el Congreso puede autorizar, cuando quiera, la venta de cuatro ó seis mil leguas. La base de la venta es de mil patacones por legua; pero el precio que se obtiene, es de

cuatro, cinco ó seis mil patacones, segun lo acreditan las últimas ventas hechas.

Quiere decir que el 50 o/o de la venta de tierras públicas importará dos ó tres millones de patacones.

Sr. Lagos Garcia—Entiendo que la base de venta es quinienos patacones por legua.

Sr. Bouquet—Mil patacones. Podemos verificarlo con ver la ley.

Sr. Lagos Garcia—Yo tenia una ligera idea de que era quinientos patacones.

Sr. Bouquet—No, señor.

Esas tierras, que se ha vendido antes de ahora á cuatrocientos pesos fuertes, se venden ahora fácilmente, como se sabe, á cuatro, cinco ó seis mil pesos fuertes.

Entonces, pues, no es nada exajerado el decir que las mil leguas de tierra, que se puede vender en este año ó en el próximo, importaran por lo menos cuatro ó seis millones de duros.

Resultaria, pues, que las escuelas de la Capital tendrian, ademas de los recursos que he enumerado, dos ó tres millones de pesos fuertes, por la venta de la tierra pública.

Vendria entonces lo que he insinuado: la provision exesiva de recursos para una sola reparticion, con perjuicio de muchos y muy importantes servicios públicos.

Despues, ofrece otro inconveniente este recurso, y es la misma inseguridad de su producido. ¿A cuanto sube? No se sabe. Si mañana el Congreso dice: «No se venda mas tierra pública», el recurso habrá desaparecido por completo, y entonces todas las previsiones de la ley serian ilusorias.

Sr. Lagos Garcia—Eso no podria hacerse, desde que por esta ley se fijara tal recurso.

Sr. Bouquet—Sí, señor, podria hacerse, porque esta disposicion es accidental. Dice: el 50 o/o de lo que produzca la tierra pública.

Por consiguiente, la base es insegura.

Creo, pues, señor Presidente, que cuando la educacion tiene ya afectados como recursos cerca de ochocientos mil patacones, segun lo he demostrado, no hay necesidad de tocar la tierra pública; y por lo tanto, he de votar en contra de este 50 o/o, reservándome proponer en oportunidad, como medio de asegurar mas todavia la renta escolar, un 10 o/o de aumento sobre la contribucion directa y la elevacion á 50 o/o de la cuota correspondiente al impuesto de patentes de la Capital.

Sr. Leguizamon (O.)—Debo suponer, señor Presidente, que la Cámara está un poco fatigada con la discusion de este largo

proyecto ya que nos ha ocupado dos terceras partes del mes; y por consiguiente, voy á limitarme á dar brevísimas respuestas á las observaciones que diferentes Diputados han hecho á este artículo.

En lo relativo á las tierras públicas, no hay, como se comprende, nada axiomático. Si hemos tomado el cincuenta por ciento de este recurso, para darlo á la institucion de la educacion comun en la Capital, en las colonias y territorios nacionales, es principalmente porque se trataba de un recurso susceptible de un gran aumento en el porvenir, llegando á un valor que hoy no tiene sino muy incierto y precario.

De manera que todos los cálculos que puedan hacerse hasta ahora sobre la venta de las tierras nacionales, recorren un diapasón bastante estenso, que léjos de llegar en su máximun á la suma apuntada por el señor Diputado por Córdoba recientemente, en el cálculo de los autores del proyecto no pasaría de cien mil pesos anuales, reconociendo, como él, que este recurso, susceptible de tomar un gran desarrollo en el porvenir, no lo tiene actualmente.

Y como al fin esta ley es susceptible tambien de ser modificada en este punto por el Congreso, en el ejercicio de sus facultades, el año que viene, de aquí á dos años, de aquí á tres, cuando el recurso resultase exesivo sobre las necesidades á remediar, no puede hacerse por el momento una cuestion sería sobre si debe ó no fijarse el cincuenta por ciento ó el treinta.

La Comision habia propuesto el treinta por ciento sobre este recurso; nosotros lo remontamos al cincuenta, teniendo presente esta otra consideracion:—que la instruccion pública que tratamos de desarrollar está principalmente en la Capital de la República, territorio nacional, y en las colonias y demas territorios de la Nacion, que son tambien nacionales; y como estos valores van á salir precisamente del lugar donde van á desarrollarse estas escuelas, el recurso vendria á ser en cierto modo, recurso natural del territorio en cuyo seno va á propender á desarrollar la instruccion y educacion de los niños.

Teniamos tambien en cuenta esta otra circunstancia: que este recurso de la tierra pública es el gran recurso de que se ha echado mano en los Estados Unidos para fomentar la educacion.

Por consiguiente, en lugar de conservarlo en el límite de treinta por ciento propuesto por la Comision, nosotros lo elevamos al cincuenta por ciento.

Se comprenderá, despues de estas breves palabras, que no estamos dispuestos á sos-

tener el cincuenta por ciento de una manera intransigente, y que aceptaremos á este respecto la moderada rebaja que la Cámara crea conveniente hacer, sin olvidar que tratamos de dotar á la instruccion pública de los recursos suficientes para vivir y que no debemos hacer pesar tampoco exclusivamente sobre la Capital de la República el sostenimiento de las escuelas y las erogaciones que esta institucion exijia.

Esto, por lo que hace al señor Diputado por Córdoba y tambien por lo que hace al señor Diputado por Catamarca, que hizo observaciones sobre este punto.

Ninguno de ellos ha propuesto un límite. Estoy dispuesto á aceptarlo tambien, con tal que se tenga en cuenta que necesitamos proveer de una manera seria al sostenimiento de la institucion que tratamos de crear.

Así, declaro que no se trata simplemente de un recurso, sino de una aplicacion natural, de una aplicacion que podemos llamar histórica, del valor de las tierras con este objeto de educacion.

Por consiguiente, aun que quedase solo sosteniendo este recurso con mi voto, consagraría lo que entiendo que es una buena nocion.

Respecto de los otros incisos de este artículo, que me parece son el cinco por ciento y el diez por ciento, cuando hablaba el señor diputado por Entre Rios, el señor Ministro de Instruccion Pública bondadosamente me llamaba la atencion sobre otros puntos interesantes de la ley, y no pude consagrarle una atencion esmerada.

Siento que no se encuentre en la sala, para pedirle esplicaciones al respecto.

Pero supongo que la Cámara le oiria, y me parece que el sentido de sus observaciones era de un carácter civil y de un carácter constitucional.

Me parece que el señor Diputado por Entre Rios decia que no podiamos quitar el cinco por ciento de las sucesiones entre hermanos, porque era en cierto modo un despojo no autorizado por la Constitucion.

Hablaba respecto del diez por ciento sobre toda herencia ó legado entre estraños, y sobre toda institucion á favor del alma ó de establecimientos religiosos, y me parece que el señor Diputado entendia que esto no puede hacerse porque es despojar á los particulares, en determinados casos, y á las instituciones, de derechos que les ha consagrado el Código Civil.

A parte de que este punto de legislacion tiene precedentes uniformes en todos los paises, y aun en nuestras Provincias, diré que si algun poder público tiene facultad para hacer escepciones, en estos puntos, á

las actuales leyes civiles vigentes en la República, es el Congreso que sancionó el Código Civil, y que por consiguiente tiene el perfecto derecho para modificarlo en los efectos de sus disposiciones, siempre que lo crea conveniente, sin que esto importe, de ninguna manera, sancionar un despojo, porque no puede hacerse un despojo contra el ejercicio natural del derecho que crea el mismo poder.

El poder que tiene la facultad de crear un derecho á los particulares, tiene perfecta facultad para retirarlo, mientras no sea un derecho adquirido, mientras se conserva en la categoría de la promesa de derecho.

No puede hacerse entonces el argumento constitucional.

Se ha hecho el argumento ante nuestros tribunales con relacion á las facultades legislativas de las Provincias; se ha negado á estas concurrencia de facultades legislativas sobre este punto, por cuanto se consideraba que esa legislación afectaba las disposiciones del Código Civil, que las Provincias no pueden modificar, despues que el Congreso ejerció su facultad constitucional de dictarlo para toda la República. Pero si este argumento tiene alguna fuerza respecto de las facultades legislativas de las Provincias, no tiene ninguna respecto de las facultades legislativas del Congreso.

Sr. Gilbert—La Constitucion establece que cada uno es dueño de su propiedad, y es propietario aquel que adquiere una cosa por un título legítimo.

Sr. Ruiz de los Llanos—Conforme á las leyes.

Sr. Leguizamón (O.)—No afecta el derecho de propiedad. Este es un impuesto á la trasmision de la propiedad en una forma determinada.

En lugar de ser el diez por ciento del valor de la sucesion líquida, que puede aceptarse ó no aceptarse, puesto que la aceptacion de una sucesion es voluntaria de parte del heredero, podria ser un impuesto en la forma de un sello del valor del diez por ciento ó del quince.

Nadie tendria motivo para decir una palabra, puesto que son gravámenes establecidos por la ley para la trasmision de la propiedad, en una forma dada.

No haré, pues, otras observaciones sobre este punto, creyendo que, con estas pocas palabras, he dejado contestado, por lo que á mí toca, las observaciones de los señores Diputados por Catamarca, por Córdoba y por Entre Rios.

Sr. Fúnes—Las razones que dá el señor Diputado para fundar su dictámen, son: pri-

mera, que es insegura la renta, segunda, que es natural, que es aplicable, que es propio ese recurso, porque la tierra es nacional y las escuelas van á ser nacionales; tercera, que se acostumbra en otras partes.

Bien, decir que el fondo es inseguro, no es razon en favor del señor Diputado; el fondo debe ser seguro, debe ser previsto de antemano. Y ese es el inconveniente de hacer un fondo especial. Para eso dictamos el presupuesto todos los años: si estamos muy abundantes, somos generosos; si estamos en circunstancias estrechas, no damos tanto; pero siempre procedemos con conocimiento de lo que se necesitará en el año.

Pero ¿á que vamos á dictar un fondo cuyo producido es ignorado, un fondo vago? Puede ser que no alcance para cubrir la necesidad á que se dedica, y puede suceder tambien que dediquemos un millon, dos millones, para aquello que no requiere sino quinientos mil pesos.

Entonces, quiere decir que este fondo especial no tiene razon de ser. ¿Por qué?

Es muy bueno, es muy importante que haya escuelas? Pues tambien es muy bueno, muy importante que haya jueces. Entonces hagamos un fondo especial para los jueces, y otro para los legisladores, porque sin leyes es imposible marchar.

Es necesaria la guerra: hagamos un fondo especial para guerra.

Y así llegaremos á la administracion antigua de la España, en que habia caja de guias, caja de muertos, caja de guerra, caja de... todo: cincuenta cajas de cada una de las cuales era necesario dar cuenta al rey.

Recuerdo que una vez que rindió cuenta un director de Provincia, y no entendian los legisladores el mensaje. ¿Que significa caja de guias, caja de difuntos... etc.

Vino á esplicar que, por la administracion antigua de los reyes de España, eran precisas cuentas especiales, y cada caja era llevada con tres llaves distintas, y por distintos empleados, etc. Lo que no impedia que algunas veces, se perdiese el diez por ciento; pero habia esas ceremonias para garantizar desde lejos y en lo posible la administracion.

Ahora que estamos en un poder organizado como todos los paises, que vemos todas las necesidades y los recursos que tenemos, que cada Diputado viene de su pueblo conociendo sus circunstancias especiales, dictamos un presupuesto general, y decimos: tanto para escuelas, tanto para guerra, tanto para jueces, etc. Pero no podemos votar, sin saber cuanto: cinco mil pesos, dice uno; no, quinientos dice el señor Diputado. Ya hay una diferencia de diez tantos mas en la primera suma.

Pero no quiero hacer fuego al fondo especial, aunque sí quiero que sepamos, cuando menos, de cuanto va á constar, que no sea vago.

La otra razon es de que los territorios son nacionales, y es muy propio, muy natural, sacar de ellos estos fondos para escuelas que van á ser nacionales.

No, señor, no es exacto, porque estos territorios que vamos á vender son de cuarenta mil leguas, y las escuelas son para un radio de diez ó veinte leguas, y cuando se pueble el resto de esos territorios, ya no habrá tierras que vender, é iremos á las rentas de la Nacion.

Ademas, este recurso del cincuenta por ciento de las tierras es una traba. Mañana necesitamos comprar buques de guerra, para lo cual vendemos cuarenta leguas de tierra; pero ya la escuela nos quita el cincuenta por ciento, y si vendemos cincuenta leguas, tambien nos quita el cincuenta por ciento. Me parece mas justo y razonable que todos los años el Congreso vote este fondo especial, y si el señor Ministro indica, cualquiera vez, que se necesita mas de lo votado, porque los territorios nacionales se pueblan, etc. el Congreso no se lo negará.

Pero ¿por que hemos de consignar un fondo, cuyo producido no sabemos cuanto será? Decia el señor Diputado que en otras partes se acostumbra. Sí, pero en otras partes se acostumbran muchas cosas. Por ejemplo, la alcabala. ¿Por que se pagaba? La razon que dan los economistas de entonces, es la de que pocas veces se vende el bien raíz, y que es justo que, cuando se venda, pague; de suerte que muchas veces no se vendian las fincas por no pagar la alcabala, por no perjudicarse el vendedor y el comprador.

Ahora, se implanta el impuesto sobre herencias transversales, diciendo que antiguamente lo hemos tenido. Sí, señor, es que no nos trataban ni como á súbditos, puesto que se sabe que mandaban echar abajo las viñas y los tabacos.

Quedaron las herencias transversales, y en las Provincias, en su estado de desquicio, no dolia mucho á los gobernadores sacar este impuesto, con la diferencia que el hijo del país pagaba diez, y el extranjero pagaba veinte. La Constitucion quitó esa diferencia; pero ahora se hace otra entre los hermanos y los parientes, de grado mas lejano. Ningun motivo hay para esto. Debe tenerse una base de raciocinio, porque, como ha dicho el señor Diputado por Entre-Rios, es violento entrar en la propiedad.

Dice el señor Diputado: el Congreso tiene facultad para hacerlo.

Quiero permitirlo; pero en casos muy especiales.

Puede ponerse una contribucion, no solamente aquí, sino en toda la República; pero como la Constitucion dice, solamente en circunstancias muy especiales. Estas no existen, luego la base de este impuesto debe ser la equidad, porque sin equidad no hay justicia, y sin justicia no hay ley.

Y voy á demostrar que no hay equidad.

El que regala, el que dona, no paga derechos de setenta y cinco ni de cien.

Supongamos que un hombre regala a vida una casa á otro: no paga contribucion pero el que al morir regala, si la paga. ¿Porqué esta diferencia? Si hubiera una razon de justicia, no existiria. Pero es que no la hay: se grava, como he dicho, segun una costumbre antigua.

La propiedad debe ser sagrada.

A mas, dice el señor Diputado que la Provincias no pueden hacer esto, pero que el Congreso sí.

Esta es otra razon que no tiene fundamento. En este caso no estamos legislando como Congreso Nacional para la República en cuyo caso hay otra razon de ser, hay otra base de justicia para las leyes; legislamos para una localidad.

Esta no es una ley general; es una ley particular.

Y si el señor Diputado reconoce que la Legislaturas de Provincia, no tienen derecho de hacer esto, que corresponde á la autoridad nacional, me parece que, cuando menos, toma mucha fuerza la duda de si tendremos esa facultad, cuando estamo procediendo como Legislatura de la Capital.

Si hicieramos esto como Congreso Nacional, y en un caso de extrema necesidad para la Nacion, podria admitirse; pero estamos obrando como Legislatura, y como tal vamos á dictar una ley.

Me parece que, por ningun motivo, se puede sostener esto: en primer lugar, el derecho de cincuenta por ciento, que se impone sobre la venta de tierras nacionales y en segundo lugar, el impuesto sobre las herencias transversales. Mucho mas cuando se ha demostrado por el señor Diputado por Córdoba, que hay un exeso de fondos que se pueden emplear en las escuelas.

He dicho.

Sr. Leguizamon (O.)—Señor Presidente: Yo creo que en materia de escuelas de educacion, estamos muy al principio, es muy poco lo que tenemos adquirido en este terreno. Puede decirse que, en esta materia, lo que habiamos conquistado era la proclamacion de este principio, que es reconocido por la opinion unánime é ilus

trada del mundo entero: que las escuelas deben tener fondos propios. Y es precisamente contra este principio, que nadie contesta, que todo el mundo aclama, es contra él que se levanta el señor Diputado.

Sr. Funes—He dicho que no hacia cuestion de esto.

Sr. Leguizamon (O.)—Me alegro mucho que el señor Diputado por Santa Fé reconozca este principio. Y, puesto que estamos de acuerdo en este punto, entraré en otro órden de ideas, ¿como se constituye este fondo propio de escuelas?

Indudablemente, no se puede constituir por las dotaciones anuales del presupuesto, como el señor Diputado indicaba. Precisamente, se constituye un fondo propio para que las escuelas tengan asegurados estos bienes, y no queden á merced de la buena ó mala disposicion del Congreso para votarlos, de las exigencias que la situacion general del pais imponga, y que podrian impedir al Congreso destinar fondos especiales á estas atenciones particulares!

Uno de los recursos que se habia considerado y se considera mas conveniente para constituir este fondo propio, es precisamente el de esos derechos sobre herencias transversales. El señor Diputado los ataca y dice que es un resabio de la España.

Efectivamente, señor Presidente, por la legislacion española teniamos el derecho de dos por ciento, sobre las herencias transversales. Pero hemos sido nosotros, despues que dejamos de pertenecer á España, los que elevamos este derecho al diez y al veinte por ciento, y por un decreto del año 15 ó del año 16. Y este derecho ha subsistido en Buenos Aires, hasta el año 57, y creo que en algunas Provincias existe todavia,

Por consiguiente, no hagamos cargo á la España de esta legislacion; porque si bien ella nos la introdujo, en una proporcion muy pequeña, nosotros la elevamos, sin graves inconvenientes, á proporciones quizá exageradas.

Sr. Funes—Cuesta arrancar los vicios.

Sr. Leguizamon (O.)—Y entonces, yo digo que el cinco por ciento para las herencias colaterales, y el diez por ciento para las herencias á estraños, es un impuesto sumamente moderado, y que reviste precisamente, todos los caracteres que hacen aceptables y soportables los impuestos.

Los colaterales, esceptuando los hermanos, vienen á recibir una fortuna con la cual ciertamente no contaban; por consiguiente, el impuesto de cinco por ciento sobre la herencia que reciban es el impuesto

mas fácil de pagar; un impuesto que se paga con mucho gusto, un impuesto que reviste los caracteres mas perfectos de justicia.

Lo mismo digo respecto de los estraños: aquel á quien le viene una fortuna sin pensarlo, está realmente muy dispuesto á pagar el diez por ciento al Estado.

Pasaré á otro punto: al referente al producto de tierras públicas.

Sobre este punto debemos tener en consideracion esta circunstancia: este fondo de escuelas que va á administrar el Concejo, va ser un fondo comun para la Capital, las colonias y los territorios nacionales.

Todos sabemos que la Capital tiene, en los recursos ya enumerados, suficientes fondos para atender á la educacion en la Capital; pero no es justo que sus recursos se empleen para costear y sostener las escuelas en los territorios nacionales; y bajo este punto de vista es conveniente que un recurso, que no sea precisamente los impuestos de la Capital, se agregue á este fondo general para las atenciones de las escuelas de los territorios nacionales.

Todos sabemos tambien, que en esta materia tenemos mucho que hacer. No nos alarmemos por la exajerada cantidad de fondos. Al contrario, alarmémonos precisamente por su exigüidad. Tenemos que empezar por construir edificios para escuelas, que no tenemos en ninguna parte.

Entonces, pues, es necesario que se agreguen á este fondo de escuelas algunos recursos provenientes de la venta de tierras públicas; porque todos sabemos, y si estuviere presente el señor Ministro de Hacienda nos lo diria, que lo que es contribucion directa en las colonias nacionales es un impuesto que ó no se percibe, ó produce una cantidad tan insignificante que no puede tenerse en cuenta.

Creo que el cincuenta por ciento sobre el producido de la tierra puede ser exajerado; pero creo tambien que no debe reducirse á menos del veinte por ciento.

Yo arguyo, señor Presidente, bajo la base del precio de la tierra que hemos mandado vender el año pasado: una base de quinientos pesos la legua.

Sr. Bouquet—Mil pesos.

Sr. Leguizamon (O.)—Me parece que son quinientos.

Sr. Funes—Mil.

Sr. Balsa—Mil en unas, y quientos en otras.

Sr. Leguizamon (O.)—Podria leerse la ley.

Esa ley dispone que no se venderan al año mas de mil leguas. Por consiguiente,

dado caso que se vendiesen esas mil leguas, —que no se venderan, porque todos sabemos que no se ha vendido todavía nada,—el producido de esa tierra, bajo la base de la ley, serian quinientos mil pesos. El veinte por ciento nos dá cien mil pesos. No es una cantidad exagerada: cien mil pesos bien se pueden necesitar para dotar de edificios á las escuelas y costear la educacion, en las colonias y en los territorios nacionales.

Por consiguiente, yo propondria la rebaja, del cincuenta, al veinte por ciento . . .

Sr. Demaria—El treinta por ciento.

Sr. Leguizamón (O.)—Votaré por el treinta por ciento, tambien; manteniendo todos los demas recursos que estan especificados en el artículo, y entre los cuales el quince por ciento del producido de rentas municipales, que se habia suprimido por una inadvertencia.

Sr. Argentó—Señor Presidente: Me he de oponer á los incisos que propone el señor Diputado, y muy especialmente al décimo y al undécimo.

Yo tomo esta cuestion del impuesto establecido á las herencias transversales, bajo otro punto de vista.

El señor Diputado por Entre Ríos, señor Gilbert, decia que no se debia establecer ese impuesto, porque era atacar la propiedad. En esto no estoy conforme con el señor Diputado, puesto que, como se ha respondido muy bien, no podria entonces establecerse ningun impuesto sobre las propiedades. Sin embargo, aquí yo debo hacer notar á la Honorable Cámara que no se trata de un impuesto sobre la propiedad: se trata de un impuesto por la trasmision de la propiedad, por herencia; es cosa muy distinta; como antes existia tambien el derecho de alcabala, por la trasmision onerosa de la propiedad á otro.

Sr. Fúnes—Y fué abolido en todas partes.

Sr. Lagos Garcia—En Francia se paga un impuesto sobre la trasmision de la propiedad.

Sr. Fúnes—Y en Francia hay tantos absurdos, que vea como está, ¡bajo el pié de la Prusia!

Sr. Lagos Garcia—Está mas rica que la Alemania.

Sr. Funes—Nó, la Alemania está mejor, mas civilizada.

Sr. Argentó—En esta circunstancia viene á resultar lo siguiente: que el valor de la propiedad se afecta, por el derecho sobre la herencia, con el cual el testador está gravado, como si fuera un impuesto sobre la propiedad.

Porque, supongamos que la herencia co-

siste en casas, dinero ó cualquier otra cosa que pague impuestos. Mientras estan en poder general del testador ó de los sucesores, esos bienes ya pagan la contribucion directa y todas las demas contribuciones que son inherentes á la propiedad misma. Pero ahora este derecho sobre las herencias transversales, viene á imponerse sobre la trasmision del derecho que tiene el testador de disponer libremente de sus bienes, fuera del caso en que no tengan herederos forzosos.

Y resulta entonces este inconveniente: que la gravedad de esto no está en el *quantum*, porque se ponga el cinco, el diez ó el veinte por ciento; pero podemos llegar á un caso en que seria completamente ilusoria la facultad de disponer de sus bienes. Por una razon muy sencilla: porque, si se cree el Congreso con el derecho de establecer un impuesto de diez por ciento sobre esto, puede creerse, mañana, con el derecho de establecer el veinte, el cincuenta, el ciento por ciento, tambien; pues una vez reconocido el derecho de imposicion, quiere decir que no tiene límites, con respecto al *quantum* que vá á imponer. ¿Y en ese caso, á qué queda reducido ese derecho?

Entonces, viene una limitacion á la facultad del testador, de poder disponer libremente de sus bienes, á favor de estraños y colaterales. Es decir, no me pongo en el caso en que la ley limita esa facultad, cuando hay un heredero forzoso; aquí la ley se refiere á las herencias entre colaterales ó por estraños y á favor del alma.

Digo pues que esto es inconveniente; porque, si bien es cierto que, en tésis general, como lo ha sostenido el señor Diputado por Entre Ríos, el Congreso puede modificar las leyes y los códigos, no los puede modificar de manera que venga á establecer derechos diferenciales entre la Capital, sus colonias y territorios nacionales y todas las demas Provincias de la República.

El señor Diputado ha dicho muy bien: hay una resolucion de la Corte Suprema que ha declarado que este derecho no podia establecerse por las Provincias, porque vendria á desvirtuar las disposiciones del Código sobre la trasmision de las herencias. Y ahora, digo yo: ¿es conveniente que, si está establecido por la Corte que no lo pueden hacer las Provincias, venga el Congreso á establecerlo sobre la Capital y en los territorios federalizados? ¡Pero seria indudablemente una injusticia! Porque vendriamos á establecer, por ese medio, derechos diferenciales. De modo que lo que está declarado por la Corte, que no se puede hacer en las Provincias, sin embargo, se puede

hacer en la Capital de la República y en los territorios federalizados!

Las leyes diferenciales son contrarias al espíritu y á la letra misma de nuestra Constitución; por consiguiente, es necesario que la Honorable Cámara reflexione en las observaciones que estoy haciendo.

Decía, pues, que no es conveniente establecer esto, sin negar, en punto general, la atribucion del Congreso; á pesar que, como digo, vendríamos á establecer derechos que no serian muy compatibles con las disposiciones de la Constitución Nacional. Nosotros debemos hacer, respecto de la Capital y de los territorios nacionales, cuando legislamos especialmente para ellos, todo aquello que puede hacer el legislador con respecto á todas y cada una de las Provincias. Seria la manera de establecer la equidad y la igualdad de derechos.

Repito que aquí no se trata de establecer un impuesto sobre los bienes que constituyen esas herencias, gravadas ya con todos los demas impuestos sobre la propiedad, y que esto, propiamente, viene á ser un impuesto sobre el derecho de trasmision por herencia de esa misma propiedad, que equivale al antiguo y desacreditado derecho de alcabala, que, como se ha dicho, en todas partes ha sido suprimido; con la diferencia que entonces se trataba de la trasmision á título oneroso, por la venta de un bien raíz, y ahora se trata de la trasmision de la propiedad por herencia.

Y yo digo entonces: ¿qué razon de justicia hay para venir á gravar con el cinco por ciento las herencias transversales, y con el diez por ciento, las otras?

Creo que en la Provincia de Buenos Aires se ha hecho ascender este impuesto, sobre las mandas pías, á un cincuenta por ciento, si mal no recuerdo: y eso ha sido lo que dió motivo, precisamente, al fallo de la Corte; fué á propósito del cincuenta por ciento que se establecía, que mas tarde hubiera podido ser el sesenta, el ochenta, el ciento por ciento. Y si tenemos el derecho de establecer el ciento por ciento ¿á que queda reducida la facultad que el Código Civil dá al testador, de poder libremente disponer de sus bienes?

Y si se trata de una ley que abarca toda la República ¿por qué venimos á condenarla, en esta parte, para un objeto de impuesto, para un objeto muy noble en sus fines, pero que vendria á dejar ilusoria la disposicion del Código Civil en esta materia?

Y vendríamos á derogar estas leyes de una manera inconveniente, y fuera de oportunidad tambien.

Es por esto que no admito, en este caso,

no digo el cinco, ni el uno por ciento, por que no es el *quantum*, no es lo que se puede imponer, lo que nos debe preocupar, sino el principio que está comprometido, y cuya desaparicion vendria á echar por tierra toda nuestra legislación.

Sr. Leguizamón (O.)—Pido la palabra para hacer moción, á objeto de que se cierre el debate.

—Apoyado.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido que se voten los incisos observados.

Sr. Lagos García—Para el caso de que fuera rechazado el primer inciso, yo propondría el 20 ojo, y le agregaría esto, para obtener el voto de algunos señores Diputados que tienen duda sobre el producido de la venta de tierras: «con tal que no exeda el producido de 200,000 ps.»

Sr. Presidente—Se votará el artículo 42, inciso por inciso.

—Se pone á votacion el inciso 1º, y resulta rechazado.

Sr. Lagos García—Ahora viene la forma que yo propongo: «1º El 20 ojo de la venta de tierras nacionales, en los territorios y colonias de la Nacion, siempre que no exeda el producido de 200,000 ps.

—Apoyado.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido que se vote por partes el inciso 1º que se propone, siendo la primera, hasta colonias de la Nacion.

—Votado por partes el inciso propuesto por el señor Lagos García, es aprobado en su totalidad.

—Se procede á votar los demas incisos, y son aceptados.

—Se pasa á cuarto intermedio.

—Continúa en segunda hora la sesion.

—Se dá lectura del art. 43.

Sr. Demaría—El señor Diputado autor del proyecto que se discute, está conforme, segun me lo ha manifestado, en suprimir de este artículo las palabras *por funcionarios responsables*.

Sr. Leguizamón (O.)—Es completamente cierto.

Sr. Enciso—Entonces debe votarse sin esas palabras.

—Se aprueba el artículo, con la supresion indicada.

—Se dan por aprobados los artículos 44, 45

y 46.

—Se dá lectura del 47.

Sr. Demaría—Me parece que no habrá inconveniente, por parte de los autores del proyecto, en agregar las siguientes palabras; dando inmediatamente aviso á la Direccion.

Sr. Leguizamón (O.)—No hay inconveniente.

—Se aprueba el artículo en esa forma.
—Se aprueban los artículos 48, 49 y 50.
—Se da lectura del § 1.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pido la palabra.

Yo propondría á los señores Diputados autores de este proyecto la modificación del artículo 51, en los términos siguientes:

El Concejo Nacional de Educación, se compondrá de un Presidente y ocho vocales, de los cuales cuatro serán inspectores de las escuelas de la Capital, colonias y de las escuelas subvencionadas de las Provincias, todas las que serán divididas convenientemente en cuatro secciones.

El objeto de dar esta forma á este artículo es dejar, en cuanto sea posible, el Concejo Nacional de Educación con la forma que tiene actualmente.

Esta distribución hecha en el trabajo, en la Comisión Nacional de Educación, aun cuando de reciente data, ha producido hasta ahora beneficios notables en la educación, en la inspección de las escuelas, en la administración de los fondos que están á cargo de la Comisión, en la inspección de los documentos que son enviados de las Provincias, relativos á las subvenciones; y creo que siendo de estos ocho vocales, cuatro los permanentes, hay con estos número bastante en la Comisión Nacional de Educación, para que sean resueltas allí todas las cuestiones de alguna trascendencia y que exijan deliberación; mientras que los otros cuatro, siendo miembros del Concejo, estarán habilitados, por sus conexiones con él, para intervenir de una manera mas eficaz en las escuelas; y á ellos le será encomendada, pues, una tarea un poco menos ventajosa, pero muy eficaz, como digo.

Teniendo sus relaciones con la Comisión Nacional de Educación, de un lado, y viendo practicamente lo que pasa en las escuelas subvencionadas por la Nación, en las escuelas de la Capital y de las colonias y territorios nacionales, se hallaran en aptitud de hacer todo cuanto la ley exige de la Comisión Nacional de Educación.

Yo sé, señor Presidente, que hay divergencia de opiniones en cuanto al número de individuos que deben componer el Concejo; sé tambien que el proyecto de ley propone la existencia de inspectores.

Los inspectores que la ley propone serian de una categoría inferior á estos, que tendrian una especie de superintendencia; serian menores en número y tendrian una zona mayor que inspeccionar; y, por el hecho

mismo de ser nombrados en la forma que lo son, tendrian menos autoridad.

Si los autores del proyecto aceptan esta indicación, tendré motivo de agradecérselo.

Sr. Lagos García—No hay inconveniente.

Sr. Leguizamón (O.)—Ya habia tenido el gusto de conversar con el Sr. Ministro respecto de la disposición de este artículo, y consecuente con la gran divergencia de opiniones que se manifestó al respecto en el seno de los Diputados autores del proyecto, cuando me tocó informar sobre el proyecto mismo, hice la declaración de que en este punto quedaban salvadas todas las opiniones porque habia sido imposible ponerlas de acuerdo.

Se tomó el número de cinco, que propone el artículo 51, como un término medio de las diferentes indicaciones que comenzaban por uno, es decir, por la dirección unipersonal, y que alcanzaban hasta nueve como actualmente existe.

El punto, para mí, no es de aquellos sobre los cuales puede decirse que la experiencia uniforme haya establecido reglas fijas en un sentido ó en otro, y por consiguiente la opinión que cada uno tiene á este respecto depende, mas que de otra cosa, de su apreciación personal respecto de la calidad del trabajo, de lo anómalo de las funciones y de los otros medios que tiene la Dirección para atender los objetos que le pertenecen.

Así, pues, consecuente con estas ideas, no me opongo á la indicación hecha por el señor Ministro, ni la acepto de una manera decidida; quiero dejar á la resolución de la Cámara este punto, dando siempre preferencia á la forma que el proyecto aconseja; y dejo de esta manera, en la mas completa libertad, tanto á los compañeros en la redacción del proyecto, como al señor Ministro y los demás Diputados, para adherir al temperamento que les parezca mas conveniente.

Por consiguiente, me limito solamente á esto.

Sr. Demaria—Desearia que se leyera los dos artículos: el del proyecto y el presentado por el señor Ministro.

—Se lee el artículo § 1 del proyecto en discusión:

El Concejo Nacional de Educación se compondrá de un presidente y cinco vocales: de estos, dos serán profesores normales, con diploma y cuatro años de ejercicio en el profesorado ó inspección de las escuelas públicas.

Sr. Leguizamón (O.)—En este punto hay un error: deben ser cuatro vocales. Un presidente y cuatro vocales; dejando el número impar.

—Art. § 1. propuesto por el señor Ministro:

El Concejo Nacional de Educacion se compoñdrá de un presidente y ocho vocales, de los cuales cuatro seran inspectores de la Capital colonias y Territorios Nacionales y de las Provincias; todas las que seran subdivididas convenientemente en cuatro secciones.

Sr. Ministro de Justicia Culto é Instruccion Pública.—Añadiré, como recuerdo para la Cámara, que por la ley de subvenciones, está obligada la Nacion á darlas á las escuelas de las Provincias, proporcionalmente. La proporcion varia segun las Provincias. Si el trabajo encomendado al Concejo de Educacion, se limitara á las escuelas de la Capital, á las colonias y á los territorios nacionales, yo creo que el Concejo estaria bien compuesto como lo proponen los señores Diputados; pero es necesario no olvidar que existen estas escuelas subvencionadas, en las Provincias; que esas subvenciones representan muy fuertes cantidades, que se gastan actualmente en ellas, y que seria muy conveniente para el Concejo tener á su disposicion miembros autorizados que inspeccionasen, como por los ojos mismos de él, lo que pasa en esas Provincias, ya que estan comprometidos tan grandes intereses.

Así, pues, me parece que es muy conveniente que haya miembros intimamente ligados con el Concejo, que tengan la autoridad suficiente para ejercer una vijilancia eficaz en las escuelas de las Provincias, principalmente para que no sean defraudadas las esperanzas de la Cámara en cuanto á la accion de esa Corporacion, y para que sean cuidados, en cuanto sea posible, de una manera satisfactoria, los fondos que se dan para esas subvenciones.

No tango mas que agregar.

Sr. Demaria.—Yo he tenido ocasion, señor Presidente, de conocer la exactitud de lo que nos dice el señor Ministro, respecto de lo necesaria que es la inspeccion para vigilar la inversion de las sumas con que la Nacion subvenciona á las escuelas de las Provincias, y por consiguiente estaria dispuesto á aceptar lo que el señor Ministro propusiera con este objeto; pero no me parece conveniente en la forma que él indica.

La Comision proponia, en el proyecto desechado, que esta ley se extendiera tambien, en su accion, á todo territorio de la Nacion, precisamente teniendo en cuenta lo que acaba de manifestar el señor Minisiro; y quizá únicamente se extendia á la Nacion á este solo objeto de inspeccion de la renta.

El proyecto disponia la creacion de inspectores, para la verificacion del empleo de esas sumas, con que contribuye la Nacion, y establecia que cada uno de los concejeros tuviese á su cargo dos Provincias para vigilar la inspeccion que á su turno haria el inspector á quien se mandara.

Yo acepto, señor Presidente, si el señor Ministro propone que se nombren inspectores á este solo objeto; pero no acepto que esos inspectores sean al mismo tiempo miembros del Concejo, porque esto trae graves inconvenientes, que no enumeraré porque me parece que no es necesario hacerlo en este momento.

Debo hacer una última observacion al señor Ministro. La Nacion no subvenciona las escuelas de las diferentes Provincias, y por consiguiente, la redaccion del artículo, como lo propone, estaria en contra de lo que realmente es: la Nacion subvenciona la educacion en las diferentes Provincias.

Así, pues, la mision de estos inspaectores seria vigilar el empleo de esa subvencion en las Provincias, y no en las escuelas, porque no se subvenciona escuela alguna determinada; se dá á cada Provincia una cantidad, para que la reparta en la forma que establece la ley, en ciertos casos.

Sr. Argento.—Desearia hacer una pregunta á la Comision.

Creo que ella ha tenido en vista, para expedirse en esta parte, la sancion que ha venido del Honorable Senado, sobre esto mismo; y desearia que me dijera que era lo que disponia, porque no lo recuerdo.

Sr. Demaria.—Me parece que estaba conforme con lo que he manifestado.

Sr. Argento.—Porque yo tenia idea que eso se habia sancionado ya.

Sr. Presidente.—Se va á votar el artículo en discusion.

Sr. Leguizamon (O.)—Pido que se vote por partes.

Sr. Presidente.—Se vá á leer el artículo, para que el señor Diputado, indique donde se vá á dividir.

—Se lee nuevamente el artículo 1.

Sr. Leguizamon (L.)—Veo que no se puede votar por partes.

Como soy partidario de la direccion única, votaré en contra de uno y otro artículo, para proponer despues un superintendente.

—Se vota el artículo en discusion y es rechazado.

Sr. Presidente.—Ahora corresponde que la Cámara resuelva si el artículo propuesto por el señor Ministro, ha de pasar á Comision ó si ha de ser tratado inmediatamente.

—Se resuelve tratarlo inmediatamente, y se dá lectura de él.

Sr. Presidente.—Está en discusion.

Sr. Leguizamon (O.)—Simplemente para hacer saber al señor Ministro, que votaré con él en cuanto al número, porque al fin este no

perjudica, desde que se procura tener mayor vigilancia y mayor atención en el desempeño de los deberes del Concejo. Pero me parece que el señor Ministro convendrá conmigo en algo que es sustancial: que los miembros del Concejo, no pueden ser inspectores, no deben serlo: que concejero é inspector son dos cosas que se excluyen en la esencia y en la práctica. Convendrá también conmigo en otra circunstancia y es que debe exigirse á este Concejo cierto número de calidades técnicas y especiales.

De manera que, aún aceptando este número que propone el señor Ministro, yo desearía verlo entrar en el camino que reputo bueno, de que los inspectores no sean á la vez concejeros, ó por lo menos, que los inspectores no tengan voto deliberativo en el Concejo.

Donde existe un Concejo, los inspectores concejeros no tienen voto deliberativo, sino voto consultivo. Son llamados al Concejo para dar informes, etc. pero no forman parte de la dirección, porque ellos no pueden aprobar sus propios actos, porque no pueden juzgar sobre el cumplimiento de sus deberes de inspección, porque hay incompatibilidad entre ser parte, como es el inspector, y ser juez de sí mismo, como lo sería teniendo voto deliberativo.

Me parece que, respecto á este punto, también el señor Ministro conviene conmigo: es indispensable que en el número de los concejeros haya alguno que tenga cualidades técnicas, y hasta es conveniente exigirlo no solo como una necesidad del desempeño de las funciones, sino hasta como una razón de estímulo para los maestros distinguidos.

Para los profesores que han desempeñado por muchos años los puestos de la educación al frente de las escuelas, la inspección es una recompensa, es un estímulo que les dá siempre la esperanza de que algún día irán á formar parte de la dirección de la educación, á la cual han servido como soldados.

Hago estas indicaciones al señor Ministro en el interés de que adhiera á aceptarlas, y me parece que el número ya es indiferente, cuando haya estas dos condiciones, que en mi opinión, dan una existencia regular una existencia completamente independiente al Concejo de Educación.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Me parece señor Presidente, que esto puede ser cuestión de reglamentación.

Desde luego, están indicados los trabajos que deben hacer los inspectores. No hay mas que mencionarlos, para saber que esos inspectores no pueden ser parte del Concejo como miembros deliberantes de él.

Su misión será inspeccionar, y para esto tendrán que estar ausentes; por lo tanto, no

formaran parte del Concejo en cuanto á sus deliberaciones.

Esto podría establecerse, pues, en la reglamentación; y como en la ley se dispone que estos inspectores han de viajar, puesto que para eso son inspectores, está dicho por lo mismo que no podran formar parte del Concejo Deliberante, siendo miembros de él solamente para darle mayor autoridad.

En cuanto á que sean profesores normales los inspectores miembros del Concejo, no veo inconveniente alguno en ello; el proyecto no aparta á los profesores normales; pero no debe desconocer el señor Diputado que hay muchos hombres versados en la educación, con condiciones de competencia manifiesta, que se han ocupado muchísimo de la educación y son hábiles en el manejo de las escuelas, que no tienen, desgraciadamente títulos, y esos hombres serian apartados si se estableciera en la ley la obligación impuesta al P. E. de llenar el número de concejeros con maestros normales.

Sr. Leguizamon (O.)—Pero le quedan al señor Ministro dos terceras partes de puestos para darlos á personas que sean maestros. Yo propongo solamente que los profesores sean una tercera parte.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Se sabe que los maestros de escuelas que recién salen de los colegios normales no estan preparados para ocupar estos puestos. Se sabe que, para que reunieran todas las condiciones necesarias para ser miembros del Concejo, habria que elegir maestros normales experimentados, y por lo tanto que no hubieran salido de nuestras aulas:—serian extranjeros.

No digo que sea un inconveniente lo que sostiene el señor Diputado; pero sí hago presente que quizá por esta necesidad, de elegir maestros normales, sean separados del Concejo miembros importantes que han figurado con ventaja en materia de educación en nuestro país.

Por eso, pues, yo admitiria cualquiera modificación en el artículo, que estableciera lo que dejo dicho. Por ejemplo, que se dijera en el artículo que estos cuatro inspectores no tienen obligación de asistir y concurrir con su voto á las deliberaciones del Concejo, y que conservaran el título de concejeros, solamente para dar al Concejo mayor autoridad.

El artículo, como he dicho, no aparta á los maestros normales; y seria del resorte del P. E. ver si acaso esos maestros normales se encuentran en condiciones requeridas para formar parte del Concejo.

A este respecto diré que no creo que el P. E. desdeñaría ocupar personas que unie-

ran á su reconocida competencia, la competencia legal acreditada por un título.

Yo admitiría al señor Diputado que introdujera alguna variación en el sentido indicado, como admito también la indicación hecha por el señor Diputado Demaria, respecto á las escuelas subvencionadas.

Sr. Leguizamon (O.)—Yo queria dejar claramente establecido el pensamiento del señor Ministro: esos inspectores, miembros del Concejo, van á hacer personalmente la inspección fuera de la capital?

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Si, señor, como la hacen ahora.

Este artículo no varía nada con relación á lo existente.

Hoy los miembros del Concejo se trasladan á las Provincias, donde hay escuelas subvencionadas.

Sr. Leguizamon (O.)—Entonces, los inspectores no pueden ser miembros del Concejo.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Yo diria: «El Concejo Nacional de Educacion se compondrá de un Presidente y cuatro vocales.»

Sr. Zeballos—Y los cuatro inspectores vendrian en seguida.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Si, señor.

—Apoyado.

Sr. Leguizamon (O.)—Podria agregarse tambien: *cuatro inspectores con voto consultivo*, simplemente.

Sr. Figueroa (F. C.)—Yo creo que lo que se practica actualmente, es lo siguiente: que estos inspectores, en casos en que se trata de la inspección hecha por ellos, no votan. Son concejeros solamente cuando no desempeñan las funciones de inspección.

Una vez que desempeñan las funciones de inspección, se retiran para que el Concejo tome sus deliberaciones.

Sr. Lagos Garcia—Pido que se lea el artículo.

—Se lee.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Me parece, señor Presidente, que todo quedaria salvado si se añadiera, como me acaba de observar un señor Diputado, despues de la palabra: *inspectores*, las siguientes: *sin voto en las deliberaciones*.

Sr. Olmedo—Entonces, no seran concejeros.

Varios señores Diputados—Mejor es separarlos.

Sr. Figueroa (F. J.)—«Cuatro inspectores encargados, etc.»

Sr. Presidente—Se votará como propuso originariamente el artículo, el señor Ministro.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Yo acepto la division del artículo en dos.

No se me ocurre en este momento la forma; pero podria quedar el artículo en esta forma:

Habrá, ademas, cuatro inspectores encargados de la inspección de las escuelas.

Sr. Presidente—El señor Ministro desea hacer un artículo segundo.

Entonces se votará el que ha propuesto anteriormente.

—Se lee: Art. 31. El Concejo Nacional de Educacion se compondrá de un Presidente y cuatro vocales.

Sr. Calvo—Este es un artículo. Votemos este y despues el otro.

Sr. Achával Rodriguez—Mejor seria reconsiderar el artículo anterior.

—Se lee la segunda parte del artículo 31: «de estos, dos seran profesores normales con diploma.»

Sr. Presidente—Sirvase dictar el señor Ministro la segunda parte del artículo.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—La otra parte puede ser un párrafo que diga:

Habrá, ademas, cuatro inspectores encargados de la inspección de las escuelas de la Capital, colonias, territorios nacionales y de las Provincias subvencionadas.

Sr. Rojas (A. D.)—Las Provincias no son subvencionadas.

Si fueran subvencionadas dispondrian del dinero como quisieran. Luego son las escuelas las subvencionadas.

Sr. Figueroa (F. C.)—Aqui se determina que haya cuatro inspectores para la Capital. Yo creo que quedaria bien así:

«Habrá, ademas, cuatro inspectores encargados de vigilar la inversion de los fondos con que concurre la Nacion á la instruccion primaria en las Provincias.»

Si se van á poner cuatro inspectores para todo, no habrá nada.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Yo acepto la redacción propuesta por el señor Diputado por Catamarca.

Sr. Olmedo—Pido la palabra, para decir que votaré en contra de la segunda parte de ese artículo y no de todo él, porque la primera parte de ese mismo artículo que se acaba de leer, á mi juicio, sin darse cuenta de lo que importaba el proyecto del señor Leguizamon, que he tenido el honor de firmar con él, preveía ya la inspección de las escuelas comunes de la Capital y de las colonias.

El proyecto es enteramente previsor y completo: «El Poder Ejecutivo y la autoridad escolar nombrarán los inspectores que juzguen convenientes para vigilar las escuelas, los textos, los maestros, etc.»

Ahora, para las escuelas subvencionadas por la Nacion, en las Provincias, de que nos hablaba el señor Ministro, es absolutamente necesario el nombramiento de nuevos funcionarios.

En primer lugar, porque esa administracion está á cargo de las Provincias, y ellas deben rendir, al Concejo General de Educacion, cuenta detallada de la inversion de los fondos que han recibido del tesoro de la Nacion, y de todas las demás cantidades de que el Concejo quiera pedirles cuenta; de modo que es absolutamente necesaria la creacion de estos funcionarios viajeros que vayan á inspeccionar las escuelas subvencionadas en las Provincias.

Y en segundo lugar, porque muy frecuentemente puede suceder el caso de que la Provincia diga: Yo no tengo escuelas sostenidas por la Nacion; la Nacion me dá tantos mil patacones, equivalentes á la cuarta parte, á la mitad de lo que gasto en la instruccion pública, y yo les doy la inversion que quiero, conforme á las reglas de administracion que dicta mi Legislatura, y absolutamente no tengo necesidad de dar cuenta al Poder Federal sobre actos de educacion, en que se invierten en comun, los fondos de la Nacion y de la Provincia.

Sr. Figueroa (F. C.)—Pero se vá á investigar si el sueldo que se paga á los profesores es el que se dice.

Ha habido veces que se ha puesto, por ejemplo, un sueldo nominal de trescientos sesenta patacones, y solo se pagaba trescientos; para la Nacion, eran trescientos sesenta.

Eso es lo que vá á vigilarse: si hay el número de empleados y si reciben el sueldo fijado.

Sr. Olmedo—El señor Diputado hace un discurso mas largo que yo, aunque no ha pedido la palabra.

Yo creo que el señor Diputado tiene mucha razon de irritarse por tales abusos; pero yo no los he visto, por fortuna. Esos procedimientos me indignan, lo mismo que al señor Diputado; pero no creo que esos abusos, si existen, puedan cortarse con que el inspector vaya á ver personalmente la escuela, cerciorarse del número de niños y vijilar al maestro; porque todo, absolutamente todo, se puede falsear, cuando se tiene el atrevimiento, la desvergüenza de violar las leyes de la Nacion y las leyes mas fundamentales del decoro, haciendo figurar maestros, sueldos y niños que no existen.

Digo, pues, que los inspectores viajeros no van á dar resultado, como tales inspectores.

Y el señor Ministro parece que lo ha

comprendido así cuando los pone en párrafo aparte; les quita el viaje, deliberadamente, y los incluye entre los miembros del Concejo de Educacion, indebidamente, á mi juicio, con el solo propósito de elevarlos en categoria; es decir, que figuren en el presupuesto con el tanto por ciento de sueldo mayor, equivalente á la diferencia entre inspector y concejero. Esto en claro es que se trata de igualarles.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pido la palabra.

Sr. Olmedo—Ahora, respecto á la importancia que tenga un número de concejeros mayor ó menor, yo debo decir que pienso que una direccion encomendada á un número crecido de personas, será por esto mismo ineficaz. Es muy difícil poner de acuerdo, sobre materias de educacion, en lo que no hay muchos hombres preparados en el país, nueve opiniones. Seria mucho mas fácil que se pusiesen de acuerdo cinco.

Sr. Herrera—No está en discusion el artículo del señor Ministro.

Sr. Olmedo—Perdóneme; si el señor Diputado hubiera oido leer ese artículo, no me interrumpiria.

Sr. Herrera—El señor Diputado contesta á un artículo que no está en discusion, repito!

Sr. Olmedo—Está en discusion. No se enoje!

Sr. Herrera—Es que hace mucho tiempo que estamos en sesion, y, si seguimos así, será cuestion de nunca acabar!

Sr. Olmedo—Digo que yo no creo conveniente, tampoco, entregar la direccion general de las escuelas á una sola direccion, á una direccion unipersonal. Por esta razon: porque las pasiones, los errores y las tendencias individuales, que pueden ser buenas ó malas, prevalecerian, de una manera absoluta, en la direccion general de la educacion, si solamente estuviesen libradas á un solo criterio todas las reglas disciplinarias y de reglamentacion. Es por esto que encuentro conveniente el Concejo de Educacion, pero un concejo reducido en su personal. Y es por esto tambien que era de opinion, entre los que tuvimos el honor de formular este proyecto, de que se pusiese cuatro concejeros y un presidente.

He de votar por esto, en contra del artículo propuesto por el señor Ministro.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Me parece que el señor Diputado que acaba de hablar no ha tenido en cuenta que he aceptado la formacion del Concejo con un presidente y cuatro vocales.

Sr. Olmedo—Pero en seguida vienen los inspectores.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Es cierto, ademas he dicho: cuatro inspectores; pero con tal objeto.

Esta es una economía; y rogaria á la Cámara se apercibiese bien de ello: es necesario que la administracion de fondos sea bien hecha.

Sr. Olmedo—Vá á ser difícil que pruebe á la Cámara que es económico gastar mas!

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—El señor Diputado vá á ser el primero en asentir á lo que voy á decir: es económico gastar un buen sueldo en un buen inspector, que impida se derroche ó se emplee mal las fuertes sumas con que la Nacion subvenciona la educacion en las Provincias.

Si no hubieran ocurrido algunos casos, como desgraciadamente han ocurrido, no se hubieran pensado en esta necesidad.

Como lo ha dicho algun señor Diputado, si de las Provincias se sostiene que se ha invertido tanto en la educacion y se pide la contribucion proporcional del tesoro nacional, es justo que la Direccion de escuelas se dé cuenta que eso es exacto; es preciso que tenga un elemento de comprobacion; ese elemento sería el inspector, dotado de bastante autoridad y elegido con todas las condiciones necesarias para que pueda verificar esta inspeccion.

Ese es el propósito. Siento que el señor Diputado crea que en esta hay simplemente el deseo de proveer á puestos innecesarios.

Sr. Olmedo—No he dicho tanto.

Sr. Ministro J. C. é I. P.—No es ese el propósito, sino vijilar la inversion de estos fondos.

Cada año se gasta mas; estas sumas van creciendo.

Sr. Demaria—Esto es indispensable.

Sr. Achával Rodriguez—Pido la palabra.

Yo me decido tambien en contra de la última parte de este artículo, por las razones que el señor Ministro ha insinuado.

Parece que el objeto principal de estos inspectores, ó el único objeto, mas bien, es fiscalizar á los gobiernos de Provincia, vijilar sus procedimientos. Parece que no tienen mas objeto que saber si no mienten, cuando dan cuenta del estado de la educacion en su Provincia, y en consecuencia la aplicacion que de los fondos nacionales deba hacerse.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Advertiré al señor Diputado que el autor de esta forma es el señor Diputado Demaria, y que no he hecho mas que aceptarla.

Sr. Demaria—No; de esa forma, no.

Sr. Achával Rodriguez—Digo que las razones que se ha dado me deciden en con-

tra: me parece que para el Congreso de la Nacion, ó para el Concejo de Educacion, deberá siempre merecer mas fé la palabra de un Ejecutivo de Provincia que los informes de un inspector.

Un Diputado—Es claro!

Sr. Achával Rodriguez—La investigacion de los procedimientos de los gobiernos de Provincia puede revestir otra forma muy distinta: los gobiernos de Provincia proceden públicamente. Será, pues, siempre fácil averiguar si proceden con arreglo á la ley. Pero de ninguna manera creo que el Congreso deba votar una ley por la cual crea fiscales para inspeccionar los procedimientos de aquellos gobiernos.

Sr. Figueroa (F. C.)—Pido la palabra. Quiero tambien decir algo al respecto.

Pienso, señor Presidente, que los profesores no siempre están á cargo de los gobiernos de Provincia, están á cargo del Concejo de Educacion.

Ha sucedido el hecho práctico, y hemos visto eso publicado en la prensa, (hecho denunciado por el señor Sarmiento, entonces Intendente de educacion), hemos visto, decia, que se asignaba á un profesor tal sueldo, cien fuertes, por ejemplo, y no se le pagaba sino cincuenta.

Sr. Olmedo—¿Dónde ha pasado ese hecho?

Sr. Figueroa (F. C.)—Lo he visto durante la Superintendencia del señor Sarmiento.

Sr. Olmedo—Aquí se puede decir todo; pero aquí tambien se debe decir toda la verdad.

Por mi parte declaro que no es exacto lo que dice el señor Diputado.

Sr. Figueroa (F. C.)—Pues, es muy exacto.

Sr. Zeballos—Varias Provincias argentinas así lo confirman.

Sr. Olmedo—¿Cuáles son esas Provincias?

Sr. Zeballos—Y ¿cuáles son aquellas que puede citar el señor Diputado?

Sr. Olmedo—Es el señor Diputado que lo dice quien tiene que probarlo, no yo que lo niego.

Sr. Zeballos—Repito que en varias Provincias se confirma el hecho.

Sr. Olmedo—Pero el señor Diputado debe decir cuales son esas Provincias.

Sr. Presidente—Debo hacer presente que ninguno de los dos señores Diputados tienen la palabra. Quien la tiene es el señor Diputado por Catamarca.

Sr. Figueroa (F. C.)—El señor Diputado por Córdoba ha hablado ahora mas que yo hace un momento.

La segunda consideracion que tengo, señor Presidente, es que no entiendo que esto importe vigilar á los gobiernos de Provincia; mientras que encuentro lo mas natural que la Nacion conozca como se invierten sus rentas.

Por ejemplo en Catamarca no es el Gobierno quien administra estos fondos; son los concejos escolares,—y entonces la razon que se ha dado en el sentido de que esto es depresivo de la dignidad de los gobiernos de Provincia, deja de tener fuerza alguna.

En Catamarca, como digo, son los concejos escolares los encargados de administrar estos fondos, habiendo ademas un inspector del cual reciben los maestros su sueldo,—y creo que sin este sistema no marcharian bien las escuelas.

Simplemente estas observaciones queria hacer.

Sr. Galindez—Pido la palabra.

Preveo que el articulo en discusion vá á producir un largo debate, que probablemente tomará una ó dos horas mas, y como la hora es avanzada, hago mocion para que se levante la sesion.

Apoyada suficientemente esta mocion, se vota y resulta rechazada.

Sr. Herrera—Yo hago mocion para que se cierre el debate.

—Apoyado.

Sr. Rojas (Ab.)—Pido la palabra.

Hace muchos dias, señor Presidente, que la Cámara se encuentra ocupada esclusivamente de la discusion de esta ley, cuya importancia no pongo en duda. Pero hay que advertir que existen á la órden del dia varios despachos de Comision relativos á asuntos muy importantes; y no debe olvidarse que solo nos restan dos meses de sesiones ordinarias.

Yo, que estoy con licencia de la Cámara, creo que puedo espresarme de esta manera, porque tengo presente que van á quedar muchos de mis colegas, y que todos nos aflijimos cuando llega el momento de las sesiones de próroga, las cuales, cuando son muy largas, mortifican mucho á los que tenemos familia.

Hago, pues, mocion para que la Cámara se constituya en sesion permanente hasta concluir con la discusion del proyecto que nos ocupa.

—Suficientemente apoyada esta mocion, se vota y resulta aprobada por 27 votos contra 22.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pido la palabra.

Solamente dos palabras voy á decir.

El P. E. no ha tenido jamas la intencion de sospechar de ningun gobierno de Provin-

cia; y no admito, por mi parte, que se insinue que este pueda ser un propósito de él.

He aceptado la indicacion hecha por el señor Diputado Demaria, porque me ha parecido muy justa.

Si hubiera de atenerme á lo que se ha insinuado en esta Cámara...

—Murmillos en la Cámara.

Sr. Presidente—El señor Ministro espere, para continuar, que los señores Diputados se sirvan hacer silencio.

Sr. Rojas (A. D.)—Yo voy á permitirme hacer una indicacion.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Si el señor Diputado me permite? Simplemente voy á levantar un cargo que no quiero persista ante la Cámara.

Decia que si toda vez que se nombra un encargado de vigilar la contabilidad y de intervenir respecto de la inversion de fondos hubiera de entenderse que eso es por sospecha de que aquel á quien se confian los fondos ha de proceder mal, no tendria razon de ser ninguna de estas instituciones que se llaman Direccion de Rentas, Contaduria, etc.

La Contaduria no existe porque se sospeche que los poderes administradores vayan á abusar de sus facultades.

Sr. Olmedo—Creo que es justamente por eso que existe.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Entonces, todas las leyes sobre administracion son una sospecha. Yo no lo entiendo asi.

Lo único que quiero dejar establecido es que si acepto el temperamento en cuanto á la inversion de los fondos, no es porque sospeche de la honradez de los gobiernos de Provincia, sino porque es necesario, es indispensable y conveniente que la Nacion se dé cuenta de como se invierten sus dineros.

Sr. Rojas (A. D.)—Deseo saber si el espíritu de la mocion del señor Diputado por Santiago es que la Cámara continúe sin interrupcion, constantemente, la sesion hasta concluir este asunto.

Si este no fuera el espíritu de la mocion, convendria que la Cámara pasara á un cuarto intermedio, para continuar despues.

Sr. Rojas (Ab.)—Es que si nos retiramos del recinto, no se va á conseguir *quorum*.

Sr. Rojas (A. D.)—Entonces la sesion se dificulta.

Sr. Presidente—Continúa la discusion del articulo.

Sr. Leguizamón (O.)—¿El señor Ministro tendria inconveniente en aceptar que se dijera: «Cuatro inspectores encargados de la administracion de la ley de subvenciones,» funcion que, por el proyecto en discusion, se encomienda al Concejo?

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Yo no hago objecion á la forma, pero sí digo que eso serviría para demorar mas.

Sr. Calvo—Pido la palabra.

Sr. Rojas (Ab.)—Hago mocion para que se cierre el debate.

—Apoyado.

Sr. Calvo—No emplearé mas de diez minutos en esplicar mi modo de ver la cuestion, si el señor Diputado mocionante me lo permite.

Sr. Presidente—No puedo concederle la palabra, puesto que hay una mocion apoyada para que se cierre el debate.

Sr. Argento—El señor Diputado Calvo ha pedido la palabra mucho antes de hacerse la mocion.

Sr. Presidente—El Secretario informa que se han retirado algunos Diputados dejando á la Cámara sin *quorum*.

Sr. Rojas (Ab.)—¿Podria informar quienes son los que se han retirado?

Sr. Lagos Garcia—Me parece que es llegado el caso de que la minoria de la Cámara haga uso de la facultad que le confiere la Constitucion, á fin de que todos los Diputados concurran á este recinto.

Sr. Fúnes—Todos.

Sr. Lagos Garcia—Perfectamente.

El sistema parlamentario estaria completamente viciado si permitiesemos que minorias mas ó menos considerables de Diputados imposibilitasen la continuacion de las sesiones de la Cámara.

Por consiguiente, hago mocion para que el señor Presidente se dirija á los Diputados que se han retirado del recinto, ordenandoles que concurran á él á la brevedad posible.

Sr. Fúnes—A todos los que se han retirado.

Sr. Lagos Garcia—A todos.

Sr. Presidente—Se tomará nota de la mocion en la forma que la ha hecho el señor Diputado.

Sr. Fúnes—Debe mandarse llamar á todos.

Sr. Rojas (Ab.)—Los que se han retirado de la sesion no han tenido derecho á hacerlo sin permiso del señor Presidente, y yo desearia que el señor Presidente informara si los señores Diputados que se han ausentado lo han hecho con permiso de él.

Sr. Presidente—La Secretaria informará.

Sr. Rojas (Ab.)—Porque no estan en el mismo caso esos Diputados.

Los que han concurrido á la Cámara no tienen derecho de retirarse sin permiso del Presidente dejando la Cámara sin *quorum*.

Sr. Leguizamon (O.)—Pido que se lea el Reglamento.

Sr. Secretario—(Lee:)

Art. 6.—Los Diputados estan obligados á asistir á todas las sesiones desde el dia en que fueren recibidos.

Art. 7.—Ningun Diputado podrá ausentarse de la Capital durante la sesion de las sesiones, sin permiso de la Cámara. Esta decidirá en cada caso por una votacion especial, si la licencia concedida á un Diputado debe ser con goce de dieta ó sin él.

Art. 142.—Ningun Diputado podrá ausentarse durante la sesion sin permiso del Presidente, quien nolo otorgará sin consentimiento de la Cámara en el caso que esta debiese quedar sin *quorum* legal.

Sr. Demaria—Pido la palabra para dar una explicacion.

Sr. Lagos Garcia—Yo tenia la palabra porque iba á hacer una mocion.

El interés actual de la Cámara es formar *quorum*; su dignidad está comprometida con lo que acaban de ejecutar varios señores Diputados retirándose del recinto sin permiso del Presidente.

Aunque es obligación de todos Diputados concurrir á las sesiones de la Cámara, es evidente que los que han faltado mas al Reglamento son los Diputados que se han retirado cuando esta ha resuelto tener sesion permanente.

El interés de la Cámara está en constituir *quorum*; y por consiguiente, mi mocion es la siguiente.

Que el señor Presidente ordene al comisario á las órdenes de la Cámara que concurra á los domicilios de los Diputados que se han retirado y les intime, á nombre de la Cámara, la comparencia inmediata á este recinto.

—Suficientemente apoyada esta mocion, se pone en discusion.

Sr. Demaria—Pido la palabra.

Es para dar á la Cámara una explicacion que indudablemente le quitará la mala impresion bajo la cual está respecto de los Diputados que se han retirado.

Hace un instante, señor Presidente, cuando se votó y rechazó la mocion de levantarla sesion, encontrando yo que era inconveniente prolongarla como se prolongaba, me acerqué al señor Diputado por San Juan, Dr. Rojas, á insinuarle esta misma inconveniencia.

El me significó que inmediatamente que se votara el artículo en discusion ó que terminara de hablar el Sr. Ministro, iba á hacer mocion para que se pasara á cuarto intermedio, durante el cual los señores Diputados se retirarian á sus casas para volver en seguida á sesion.

Entonces, como lo ha visto la Cámara, me levanté del lado del Dr. Rojas y fui á las ante-salas, en donde estaban muchos Diputados, casi todos los que se han retirado, y les manifesté lo que me acababa de decir el señor Diputado Dr. Rojas.

Ellos se han retirado indudablemente en

la creencia de que un instante despues se iba á levantar la sesion, y que podian hacerlo sin dejar á la Cámara sin *quorum*, porque habia bastante número para votar la mocion de suspender la sesion en la forma en que iba á proponerlo el señor Diputado.

No tengo duda, señor Presidente, que esto es lo que ha dado lugar al retiro de los señores Diputados.

Por consiguiente, si hay algun culpable en la Cámara, no son esos Diputados que se han retirado en la creencia de que se iba á levantar la sesion; el único culpable seria yo, por haberles dicho que esto se iba á hacer en la Cámara.

Esta es la verdad de los hechos como han pasado.

Sr. Enciso—Sin embargo, los Diputados que se han retirado no han podido hacerlo, mucho mas dejando á la Cámara sin *quorum*.

Sr. Demaria—Decia, pues, que no es fundado lo que el señor Diputado afirma que los señores Diputados que se han retirado han tenido la intencion de dejar á la Cámara sin *quorum*, sino que ellos creian que quedaba la Cámara con un número bastante de Diputados para formar *quorum* y para levantar la sesion ó pasar á un cuarto intermedio.

No trato de justificarlos hasta el punto de decir que esos Diputados no debieron haber pedido licencia al señor Presidente, aunque quedara en *quorum* la Cámara.

Es cierto que el Reglamento establece esa forma, pero tambien es cierto que jamas la llenamos: todos los dias nos retiramos sin pedir permiso para hacerlo, y será por escepcion que se haya procedido de otra manera.

Sr. Enciso—Pero en grupo jamas!

Sr. Demaria—Se ve, pues, que no es llegado el caso de que la Cámara tome medidas respecto de esos Diputados.

Por otra parte, me parece que no es tampoco el caso de urgencia para el cual el Reglamento establece la prescripcion que se invoca para tomar esta medida. Si bien es cierto que hay algunos Diputados que estan con licencia y desean aprovechar de ella solamente despues que se sancione esta ley, esa no es una razon para que la Cámara adopte este procedimiento. Se trata, señor Presidente, como he tenido ocasion de decirlo ya varias veces, de una de las leyes mas trascendentales para la República....

Sr. Bouquet—¿Y por eso se nos deja sin *quorum*?

Sr. Demaria—Pero ya he establecido la razon por la cual se encuentra sin *quorum* la Cámara! De consiguiente, no se debe in-

sistir sobre ello, so pena de querer decir que intencionalmente se han ido.

Sr. Leguizamon (O.)—Algunos, sí—los que estaban en la votacion.

Sr. Demaria—No hay razon para hacer esta suposicion, despues de lo que he espuesto.

Decia, señor Presidente, que, á mi juicio, no era este el caso de urgencia á que se refiere el Reglamento: pero que, sin embargo de todo esto, una vez que la Cámara ha resuelto constituirse en sesion permanente, yo, como cualquiera de los otros Diputados, he de respetar esta resolucion. Pero prevengo que tambien he de hacer uso de los derechos que me dá el Reglamento: he de llegar hasta hacerme traer por la fuerza... porque á eso tengo derecho.

He de respetar las resoluciones de la Cámara, pero he de hacer uso de los derechos que tengo.

Sr. Zeballos—Eso no es respetarla.

¿A qué llamaria no respetar sus resoluciones?

Sr. Demaria—Yo puedo quedarme en mi casa, y la Cámara me puede mandar traer.

Movimiento de denegacion entre algunos señores Diputados.

Sr. Zeballos—Esa es la infraccion!

Sr. Rojas (Ab.)—Pido la palabra.

Van ya dos veces que el señor Diputado hace alusion á los que estamos con licencia, y no puedo menos que contestar.

Es necesario que el señor Diputado comprenda que yo, que me encuentro aludido, no soy de aquellos que se retiran, por mayores que fuesen los intereses que me movieran á ello, cuando un asunto de verdadero interés público se discute.

Es necesario que el señor Diputado lo sepa: he de quedar dos, tres ó cuatro sesiones mas, si tengo interés en concurrir con mi voto en esta cuestion!

Pero no se trata de eso. Precisamente he dicho, al hacer la mocion para que la Cámara resolviese tener sesion permanente, que debia justificar esa mocion porque estaba yo mismo con licencia de la Honorable Cámara y que la hacia en consideracion á otros señores Diputados, que forman la mayoria de la Cámara, y que tienen necesidad de retirarse en cierto día, de estar allado de sus familias.

Es por esto que yo hacia la mocion, declarando eso: declarando que yo tengo el derecho de ausentarme, porque estoy con licencia de la Cámara; pero que la hacia en consideracion á otros señores Diputados que no estan en mi caso.

El señor Diputado puede ser tan generoso

como quiera para echar sobre si la culpa de sus colegas que faltan á la sesion; pero con esas generosidades no vamos á remediar nada; es necesario que la Cámara tome una resolucion. Que se fije en que van ya muchos dias en que con gran dificultad venimos haciendo quorum, y justamente desde que se sancionó el artículo que motivó la mas seria discusion á que ha dado lugar el proyecto. Desde entonces venimos así; llega la hora de entrar á sesion, y no hay quorum; pasa media hora mas, se hace número con dificultad, y á cada momento está el recinto vacío.

Sr. Zeballos—Siempre son los mismos los que se van.

Sr. Rojas (Ab.)—Y es por esta razon—sin entrar á averiguar si puede haber una justificacion en la razon que el señor Diputado Demaria ha dado, pues yo no entro á juzgar intenciones, sino que juzgo el hecho,—y precisamente por los antecedentes que trae, creo que la Cámara, por dignidad propia, debe aceptar lo que se propone.

Sr. Figueroa (F. C.)—No respecto de todos.

Sr. Rojas (Ab.)—Respecto de los que se han retirado.

Sr. Presidente—El señor Secretario dirá quienes son.

Sr. Secretario—Se han retirado temprano los señores Puebla, Galindez, Solveyra, Dantas, Febre y Alvear. De estos, dieron aviso los señores Puebla, Solveyra, Dantas y Febre, á quienes se les dió licencia.

Se han retirado últimamente los señores Navarro Viola, Lahitte, Coquet, Achával, Lugones, Herrera, Centeno y Avellaneda.

Sr. Zeballos—Una corporacion!

Sr. Ocampo—Yo deseo saber quienes son los que se han retirado despues de la sancion de la Cámara; esos, á mi juicio, han incurrido en desacato.

Sr. Demaria—Pero he esplicado por qué.

Sr. Ocampo—Ya le hemos oido.

Sr. Enciso—Pido la palabra.

Es para hacer una modificacion á la mocion.

Indudablemente, hay tres categorias de faltas á lo que dispone el Reglamento en los señores Diputados que no estan presentes en este momento: la primera, la mas importante, la han cometido los que se han ido últimamente, y cuyos nombres se han leído, porque ellos sabian que habia sesion permanente; despues vienen los que se han retirado con aviso, y en seguida los que pidieron licencia, es decir, aquellos que no han creído que harian falta para hacer *quorum*.

Así es que yo haria indicacion para que fueran compelidos á venir aquellos que se

han ido últimamente, y que los otros sean simplemente invitados á venir.

—Apoyado.

Sr. Leguizamon (O.)—Pero si el apremio es para los que no vengan; si se resisten, irá la fuerza.

Sr. Argento—Es decir que los que han estado cuatro horas aquí, han de ser puestos en peores condiciones que los que no han venido? Eso no es justo!

Sr. Funes—Mejor es no venir, entonces!

Sr. Enciso—Que se lea la mocion del señor Diputado Lagos García.

—Se lee;

Se autoriza al señor Presidente de la Cámara para que por medio del comisario al servicio de la Cámara intime á los señores Diputados que se han retirado sin aviso, despues de votarse la sesion permanente, que concurran á la Cámara, en el día de hoy, á las ocho de la noche.

Sr. Calvo—Pido la palabra.

Señor Presidente: vengo á tomar parte en esta cuestion con ánimo sumamente desapasionado.

He oido hacer al señor Diputado por Buenos Aires una clasificacion que me parece un tanto original.

Hay tres categorias de Diputados que han incurrido en la falta: una es la de los que han dejado el recinto una vez resuelta por la Cámara la sesion permanente; otra es la de los que han venido en el día, y otra, la de los que no vienen nunca.

De manera, pues, que tenemos tres categorias de Diputados que incurren en la misma falta de Reglamento: que cometen desacato contra la Cámara.

Esto me recuerda el cuento aquel de un juez inglés que acostumbraba siempre atenderse mas á la letra que al espíritu, y que se encontraba en el caso de aplicar una ley que decia: «Pagará multa todo el que *entre* al río á tales horas».

Un individuo de repente aparece *saliendo* del río; no se le puede probar que ha entrado, porque ha sido bastante hábil para no hacerse ver; y el juez, por mas que el hecho de salir traia aparejado el hecho de haber entrado, declara inocente al violador de la ley.

Este es el caso: vamos á castigar severamente al que tal vez por inadvertencia se ha retirado; y vamos á absolver de todo cargo y pena á los que solo han venido hoy, pero que estan faltando dos, tres, ocho sesiones, recargándonos de exesivo trabajo á nosotros los cumplidores exactos de nuestros deberes.

Haría, pues, una profunda injusticia en proceder así.

Soy uno de los que mas interesados estan

en que se respeten las resoluciones de la Cámara.

La mayoría había resuelto que hubiera sesión permanente. Para mí, dicha resolución era muy inconveniente: tenía convidados en mi casa, y habría querido irme á comer. Y sin embargo, me quedé. . . .

Sr. Leguizamón (L.)—Muy bien hecho; pero. . . ¿y los que se fueron después de la votación.

Sr. Calvo—Allá voy, ilustre colega.—Los que se fueron cometieron una falta!

Sr. Leguizamón (L.)—Pecado mortal, según la Iglesia Católica.

—Hilaridad.

Sr. Funes—No hay que echar pelos en la leche.

—Hilaridad.

Sr. Leguizamón (L.)—El señor Diputado no es Sarmiento para darme ese consejo.

Sr. Funes—Pero puedo citarlo.

Sr. Presidente—Recuerdo á los señores Diputados que no se puede interrumpir al orador

Sr. Calvo—No importan esas interrupciones: las considero como los coros en la ópera. Uno hace el monólogo. Yo soy el tenor y los señores Diputados me están acompañando.

Digo, pues, señor Presidente, que estas tres categorías de faltas no están muy distantes las unas de las otras: y me parece que no puede imponerse mayor pena al que ha faltado minutos, que al que ha faltado horas ó días. Por consiguiente, soy de opinión que se llame *á todos*—á todos, sin necesidad de apremio, porque no creo, francamente, que en este caso ha habido la intención de cometer desacato contra la Cámara. Y si ellos lo han cometido, como se ha dicho antes, también lo hemos cometido todos en general.

Mas diré, señor Presidente: en presencia del texto del artículo que se encuentra en discusión, yo estoy con la mitad de él, y no estoy con la otra mitad, porque no la comprendo con relación á la sanción que ha tenido lugar ya.

Por ejemplo, si nos limitáramos (que es lo que voy á proponer á la Cámara) á votar la primera parte del artículo, quedaríamos libres también de. . . .

Sr. Leguizamón (O.)—Pero tenemos que considerar el resto del proyecto.

Sr. Calvo—El señor Diputado nos hablaba hoy de pecado mortal, y ahora nos amenaza con la penitencia: nos quiere hacer permanecer en ayunas hasta mañana.

Sr. Gilbert—Es que no tenemos número.

Sr. Calvo—Ya se ve que por el pecado

cometido por cuatro compañeros, todos tenemos que ayunar. Es la manera de hacerlos perdonar.

Ahora yo voy á proponer este temperamento. . . . (nunca tomo la palabra, sino para proponer algo que creo práctico), yo propongo á la Cámara que vote el artículo 51 de esta manera: «El Concejo. . . .

Sr. Presidente—Observo al señor Diputado que lo que está en discusión, es la moción del señor Diputado Lagos García.

Sr. Calvo—Sé que lo que está en discusión es la manera como hemos de castigar á los inasistentes. Pero también quiero prevenir esto: estamos castigándonos á nosotros mismos. ¡Pagamos justos por pecadores!

Sr. Presidente—No habiendo *quorum*, no se puede votar el proyecto.

Sr. Rojas (A. D.)—Y no hay *quorum* porque se han ausentado esos señores Diputados.

Sr. Calvo—Los ausentes se han ausentado á consecuencia de que el artículo les parecía demasiado enmarañado. Yo propongo que nos ocupemos. . . .

Sr. Rojas (Ab.)—Es que no podemos ocuparnos.

Sr. Calvo—Yo no me estoy ocupando del artículo, sino incidentalmente.

Hace un instante que el señor Diputado por Entre-Ríos nos decía estábamos en pecado mortal. Eso nada tiene que ver con la discusión; y yo, queriéndome dedicar á cosa más práctica, digo que este artículo, dividido en dos, cuando vengan los colegas, resolverá la cuestión inmediatamente.

Estoy discutiendo en la hipótesis de que fueran entrando los colegas mientras estoy hablando.

Sr. Balsa—Pido la palabra.

Sr. Calvo—Si todavía no la he dejado! . . .

Sr. Balsa—Pero el señor Diputado está hablando hipotéticamente, y una vez que su hipótesis no se realiza, puede dejarme hablar á mí.

El señor Diputado se ponía en el caso de que estuviera la Cámara funcionando en *quorum* legal, en este momento. No es así, por desgracia; y por consiguiente, me parece que razonablemente ha concluido el señor Diputado, lo que estaba diciendo al principio.

Sr. Calvo—No he concluido.

Sr. Balsa—Pero Señor! ¿para qué tiene el proyecto de ley en la mano si no hemos de poder votarlo ni discutirlo?

Sr. Calvo—¿El proyecto de ley? Me ocupo de él mientras dure la sesión!

Este no es mas que un incidente del proyecto de ley; y durante la sesión en que se le discute, digo yo que no debería mandarse buscar á un número determinado de Diputados,

sino á todos los que estuvieran mas cerca
¡y cuanto antes!

Por lo demas, tendré el mayor gusto en escuchar al señor Diputado. Le dejo la palabra?

Sr. Balsa—Hago mocion para que se cierre el debate.

Sr. Calvo—¿Cómo nos vamos á reunir á las ocho, si ya son las siete y diez?

Sr. Zeballos—Los enfermos no podremos venir esta noche.

Sr. Rojas (Ab.)—El señor Diputado mocionante propone que sea á las ocho y media.

Sr. Zeballos—Yo soy de opinion que no nos debemos mover del recinto, porque si salimos á la calle, no podremos regresar los enfermos.

Sr. Presidente—Se votará la mocion del señor Diputado, en el concepto de que la citacion es para las ocho y media.

—Se aprueba

Sr. Zeballos—Yo creo que se debe mandar aviso á todos los Diputados.

—Apoyado.

—Se acepta esta agregacion á la mocion.

Sr. Presidente—Pasaremos á cuarto intermedio.

—Asi se hace.

—Vueltos los señores Diputados á sus asientos continúa la sesion siendo las 9 p. m.

—Se dá lectura del art. 51 del proyecto de ley pendiente.

Sr. Ocampo—Yo pido que se vote por partes, hasta donde dice: «El Concejo Nacional de Educacion se compondrá de un presidente y cuatro vocales».

—Se aprueba hasta esa parte.

—Se rechaza el resto del artículo.

—En discusion el artículo 52.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Indicaria una correccion de redaccion. Podria quedar así el artículo:

El Poder Ejecutivo hará por si solo el nombramiento de Presidente y vocales.

Lo demas del artículo tal cual está.

Voy á manifestar la razon que tengo para esto.

La Constitucion marca los funcionarios que deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado; y yo creo que se invade un poco las atribuciones del Poder Ejecutivo cuando en las leyes se imponen condiciones que no estan en la Constitucion.

El Poder Ejecutivo actual no tiene inconveniente, ni puede mirar mal esta garantia que se da para la buena eleccion de los candidatos; pero creo que el Poder Ejecutivo no puede renunciar á una facultad que la Cons-

titucion le concede, porque no es dueño de hacerlo.

Si el Poder Ejecutivo actual encuentra bueno este procedimiento, verdad es que, renunciando esta facultad, compromete á los demas que vengan enseguida.

Siendo, pues, una facultad constitucional atribuida al Poder Ejecutivo, la de nombrar los empleados, no debe hacerse escepciones ni restricciones á esta facultad, que no emanen directamente de la Constitucion.

Por eso yo pediria que este artículo quedara tal cual está, suprimiendo solamente esta cláusula de prévio acuerdo del Senado para el nombramiento del Presidente.

Sr. Presidente—Desearia saber si los autores del proyecto aceptan la modificacion propuesta por el señor Ministro.

Sr. Gallo (D.)—Yo la acepto.

Sr. Ocampo—Creo que no tiene nada de inconstitucional.

Sr. Presidente—Entonces se votará.

Sr. Demaria—Yo he de proponer, si este artículo es rechazado, que el nombramiento no solo del Presidente, sino de todos los concejales, sea hecho por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado.

—Apoyado.

Me parece que, respecto de garantias, nadie puede poner en duda que las hay mayores haciéndose el nombramiento con acuerdo del Senado.

No me parece que pueda tampoco abrigarse dudas de ninguna naturaleza respecto de la constitucionalidad de este artículo. Es cierto que la Constitucion establece que todos los empleados públicos seran nombrados por el Poder Ejecutivo; pero tambien es cierto que nunca se ha entendido por empleado público aquel que desempeña una comision que termina durante un período que la ley establece. Ejemplos de estos tene-mos á cada paso, señor Presidente

La Constitucion no establece que el Presidente del Banco Nacional deba ser nombrado con acuerdo del Senado; y sin embargo, es esta la forma en que se hace. Acaba de dictarse una ley por la cual los demas directores de ese establecimiento deben ser tambien nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Nadie ha dicho que tal ley sea inconstitucional; y, por el contrario, el Poder Ejecutivo, á cuyo nombre habla el señor Ministro del Culto en este momento, ha sido el primero en darle cumplimiento; y hace muy pocas sesiones, el señor Ministro de Hacienda nos decia, á propósito de una interpelacion que se le hizo en esta Cámara, que el Poder Ejecutivo reconocia esa ley

como constitucional y estaba dispuesto á cumplirla.

Así, pues, no puede invocar el señor Ministro, en esto, que porque no esté espreso en la Constitución que deba solicitarse el acuerdo del Senado, sea inconstitucional esta disposición.

Me parece que, demostrado que no es inconstitucional y que hay mayor suma de garantías respecto de las calidades é idoneidad de las personas que deben desempeñar estos puestos, la Cámara debe aceptar el artículo que propongo, que fué el mismo propuesto por la Comisión.

Sr. Rojas (A. D.).—Yo debo indicar brevemente las razones que he tenido para firmar el proyecto de ley que está en discusión. Lo que diga será solamente mi espresion individual, por cuanto, propiamente, de las personas que han firmado el proyecto no hay ninguna designada para que pueda usar de la palabra en nombre de los demás.

A parte de las consideraciones que muy atinadamente ha espuesto el señor Diputado por la Capital que acaba de hablar, debo hacer presente á la Cámara las que me son personales en esta materia.

Es verdad que, por la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de nombrar todos aquellos empleados cuyo nombramiento no esté especialmente designado en ella; pero, siendo la Constitución un organismo completo, cuyas cláusulas deben interpretarse armónicamente, yo encuentro disposiciones especiales que, por esta regla de interpretación, deben hacerse prevalecer sobre las reglas generales.

Es así que la Constitución en uno de sus artículos, dice: «El Congreso ejerce una jurisdicción esclusiva en el territorio de la Capital.» Esta cláusula, interpretada en su natural estension, quiere decir que el Congreso Nacional, como Legislatura de la Capital, puede organizar los servicios relativos á esta en la forma que lo crea mas conveniente; y una de las leyes principales que debe dictar el Congreso, como Legislatura local del territorio de la Capital, es aquella que tiende á la organizacion de la instruccion primaria.

¿Quién puede sostener entonces, señor Presidente, que tratándose de dictar una ley tendiente á la organizacion de la instruccion primaria en la Capital, ha de desatenderse completamente la manera de nombrar los empleados superiores que deben dirigir la instruccion comun? ¿Es posible que el Congreso de la Nación tenga facultades para legislar sobre el territorio de la Capital, y no tenga los medios bastantes para poder determinar la forma de nombramiento de

los empleados que deben dirigir la instruccion primaria, ó las condiciones que deben reunir esos empleados y los requisitos que deben llenarse?

¿Por lo mismo que tiene esa facultad, esta limitacion no seria una interpretacion natural?

La facultad que se acuerda al Poder Ejecutivo por la cláusula que ha citado el señor Ministro de Instruccion Pública, en mi concepto, se refiere á las facultades que tiene el Poder Ejecutivo como miembro de una de las ramas de la administracion general de la Nación, á las facultades que ejerce como Poder Ejecutivo Nacional, no como gefe inmediato y local de la Capital de la República.

Y en este mismo caso, sus facultades pueden ser limitadas en todo aquello que no esté reñido con la manera de ejercer los poderes que se acuerdan al gefe de la administracion superior de una localidad.

Pero á mas de esto, señor Presidente, hay otro inciso del artículo constitucional que trata de las facultades del Congreso que dice: puede este «dictar planes de instruccion general y universitaria.»

Esta tambien es una disposicion especial que prima sobre las disposiciones generales que atribuyen al Poder Ejecutivo la facultad del nombramiento de empleados públicos.

En mi concepto, nadie podria atinadamente sostener que, tratando de ejercitar las facultades universitarias en la Capital de la República y en el resto de la Nación, no puede el Congreso, en virtud de la cláusula constitucional, determinar la forma en que ha de ser nombrado el personal docente de estos establecimientos. Y no puede, por eso, el Poder Ejecutivo decir: Yo nombro todos los empleados de la Nación, cuyo nombramiento no está regido por la Constitución, y por consiguiente me opongo á que el Rector de la Universidad, á que los catedráticos de la Universidad, á que los catedráticos de la Facultad de Medicina, sean nombrados de acuerdo con los requisitos que la ley determina.

No se puede dictar plan de instruccion primaria, secundaria ó superior, sin que se determine la manera como han de ser nombradas las personas que van á ejercer las funciones de directores en los establecimientos públicos de educacion, sin que se determinen las garantías para la permanencia en los empleos, los requisitos que deben llenarse para la separacion de esos empleados,— por la razon sencilla de que se trata siempre (y esta es la tendencia de la Constitución) de procurar formar el personal docente de la Universidad, de los

Colegios Nacionales, de las escuelas primarias, garantiendo á esa administracion de la movilidad, de las intermitencias, diré así, que siempre sufren los poderes públicos en lo relativo á la remocion de los empleados y á la provision de los empleos.

Yo creo, pues, que los que hemos firmado este proyecto, lo hemos hecho sin desconocer ninguna cláusula constitucional; y que aparte de que el Congreso tiene facultad para legislar en este sentido, es fuera de duda que hay mayores garantías de acierto en el consejo del Senado de la Nacion, al prestar su asentimiento al Poder Ejecutivo para nombrar el Concejo Nacional de Educacion.

He dicho.

Sr. Demaria—Desearia que el señor Secretario tomara la redaccion que voy á proponer.

El nombramiento del Presidente y concejeros, lo hará el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Y lo demas como sigue en el artículo.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—El defecto de redaccion que habia hecho presente, subsiste en el artículo propuesto por el señor Diputado.

Sr. Presidente—Debo hacer presente al señor Ministro que aun no está en discusion el artículo propuesto por el señor Diputado por Buenos Aires.

Sr. Ruiz de los Llanos—Observe que en el artículo que se va á votar hay un defecto de redaccion.

Dice: «El nombramiento de Presidente y de los concejeros lo hará el Poder Ejecutivo etc.»

La palabra *lo* es impropia en ese caso. Debe decirse: «El nombramiento del Presidente y de Concejeros será hecho por el Poder Ejecutivo etc.

Sr. Leguizamon (O.)—Me parece bien la correccion, y la acepto.

—Se vota el artículo en discusion, con la enmienda indicada por el señor Ruiz de los Llanos, y es aprobado.

—Sin discusion se aprueban los artículos 53 y 54.

—Se lee y pone en discusion el 55.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido la palabra.

Voy á permitirme hacer una observacion al inciso 21 de este artículo.

Por este inciso se recomienda á la Direccion General proyectar á la brevedad posible la organizacion del fondo de pensiones para maestros, condiciones de su administracion y títulos para participar de dicho fondo.

Es sobre esta ultima parte que va á versar la indicacion que voy á hacer.

Para ponerla mas al alcance de los señores Diputados, voy á permitirme pedir se lean los artículos 31, 32 y 33, como han quedado sancionados.

—Se leen.

Como se ve, por el artículo 31, tal cual ha quedado sancionado, se establece el título para participar del fondo comun, puesto que se ha dicho que los maestros que ejerciendo el magisterio durante diez años se hubieran inutilizado tendran derecho á mitad del sueldo; que los maestros que hubieran ejercido la profesion durante quince años tendran derecho á las tres cuartas partes de su sueldo; y que, en fin, los que hubiesen ejercido el magisterio durante veinte años, la tendran íntegra.

Entonces, pues, no hay necesidad de decir que la Direccion General proyectará los títulos para participar de dicho fondo, y creo que seria mas conveniente decir, en lugar de estas palabras: «para participar de dicho fondo,» *el modo y forma en que ha de hacerse efectivo el derecho á pension establecido en el art. 31.*

Me propongo, con esta modificacion, hacer posible que se salven las deficiencias que pueden haber quedado, y que han quedado seguramente, en la disposicion relativa á las pensiones, como lo han reconocido los varios señores Diputados que últimamente han tomado parte en la discusion á este respecto.

Efectivamente, algunos artículos que proyectó el señor Diputado por Buenos Aires, miembro de la Comision cuyo proyecto ha sido rechazado, no fueron aceptados, otros lo fueron, y hay indudablemente algunas deficiencias que llenar.

Por ejemplo, esta: la manera de hacer efectivo el derecho á pension, como se ha de reconocer que ha llenado completamente su ministerio de maestro aquel que pretenda acogerse á las disposiciones relativas á la pension.

Me parece que seria mas conveniente poner en lugar de estas palabras «y títulos para participar de dicho fondo» estas otras: *y el modo y forma en que ha de hacerse efectivo el derecho á pension establecido en el artículo 31.*

Propongo esta sustitucion.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Deseo saber si los señores Diputados autores del proyecto aceptan la modificacion propuesta.

Sr. Leguizamon (O.)—Acepto.

Sr. Gallo (D.)—Yo tambien acepto.

Sr. Leguizamón (L.)—Voy á proponer una modificación al inciso 21.

Como se sabe, señor Presidente, el Concejo de Educación tendrá necesidad de comprar diversos terrenos en la Capital probablemente y en los territorios nacionales también, para levantar los edificios destinados á las escuelas, y no veo en esta parte la facultad de comprar.

Por consiguiente, en el inciso 24 propondría se dijese: «Comprar bienes raíces y autorizar la construcción...» ahí viene bien la modificación.

Creo que los señores Diputados estarán conformes.

Sr. Leguizamón (O.)—Acepto.

Sr. Ruiz de los Llanos—*Y autorizar la construcción.*

Sr. Leguizamón (O.)—*Con arreglo á los requisitos de la ley de contabilidad.*

Sr. Gallo (D.)—Comprar bienes raíces á este solo objeto.

Sr. Leguizamón (O.)—Con destino á objetos de educación.

Sr. Ruiz de los Llanos—Podría decirse: «Comprar bienes raíces con destino á edificios de escuelas, y autorizar su construcción.»

Sr. Ocampo—Podría ponerse también «Autorizar la construcción ó compra de fincas.»

—Se lee como sigue:

«Comprar bienes raíces destinados á edificios de escuelas.»

Sr. Presidente—Propone alguna modificación el señor Diputado por Catamarca?

Sr. Ocampo—Podría decirse: «Para autorizar la compra de terrenos y construcción de edificios y adquisición de estos para las escuelas ú oficinas de la educación común, con arreglo á los requisitos establecidos en la ley de contabilidad.»

Sr. Leguizamón (O.)—Comprar como persona jurídica.

Sr. Secretario—(Lee) «Para la compra de bienes raíces y adquisición de estos para las escuelas.»

Sr. Lagos García—«Comprar bienes raíces», porque todos los incisos están en infinitivo.

Sr. Leguizamón (O.)—Sirvase escribir el señor Secretario: «Comprar bienes raíces con dicho objeto, de acuerdo á los requisitos establecidos en la ley de contabilidad, y con aprobación del Poder Ejecutivo.»

—El señor Secretario lee en esta forma:

Autorizar la construcción de edificios para las escuelas ó edificios para la educación común, y comprar bienes raíces con ese objeto, de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley de contabilidad y con aprobación del Poder Ejecutivo.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—¿Se vá á votar todo el artículo?

Sr. Presidente—El inciso observado. Los incisos de este artículo que no hayan sido observados serán dados por aprobados.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Tengo que observar otro inciso.

Desearía ser mas feliz, en esta ocasión, que en mis indicaciones anteriores, aunque creo tener igual razón.

El inciso segundo establece que las escuelas normales de la Capital, lo supongo, aunque no lo dice, pasan á ser dependencia, en varias de sus partes, del Concejo Nacional de Educación.

La ley de escuelas normales las pone bajo la dirección del Ministerio de Instrucción Pública, y este mismo inciso las deja bajo esa dirección, pero solamente para el pago de los sueldos y de la administración económica.

Me parece inconveniente que se entregue al Concejo de Educación lo que entrega este inciso: propone el nombramiento de maestros, la remoción del personal, la concesión y la caducidad de becas.

A lo menos, se hace una distinción entre las escuelas normales de todas las demas Provincias y las escuelas existentes en la Capital.

Estos establecimientos están bajo la dirección del Ministerio de Instrucción Pública; figuran, puede decirse, en la misma categoría que los Colegios Nacionales; y no veo porque han de pasar á ser dirigidas, en todas estas partes que dice el inciso, por el Concejo de Educación.

Pueden quedar las escuelas normales de la Capital como están ahora, sin inconveniente alguno, y establecerse algunas fórmulas que garanticen los diplomas de los individuos que estudien en estas escuelas.

Porque no veo, en todo el artículo, tampoco, inciso alguno que se ocupe de esto.

Menciono este punto porque ya se constata algunas dificultades, con motivo de los diplomas que se dan en las escuelas normales, y con la facultad que cree tener ó tenga el Concejo de Educación.

Propongo, pues, á los señores relatores de este proyecto, la supresión de este inciso, en virtud de las consideraciones espuestas; y les pido que me indiquen en qué condiciones quedan los que salen de las escuelas normales con diplomas, una vez que el Concejo tiene facultad de dar diplomas.

Sr. Leguizamón (O.)—Voy á satisfacer al señor Ministro.

Por el inciso objetado por el señor Ministro, que es el segundo, me parece, no se atribuye al Concejo Nacional de Educación sino la vigilancia de la enseñanza en las escuelas normales, y proponer el nombramiento ó la remoción de su personal, como una conse-

cuencia de la misma vijilancia que se le atribuye; proponer tambien la concesion ó la caducidad de las becas de los jóvenes que se forman para maestros de las escuelas primarias.

Hay otro artículo en la ley por el cual se deja estos establecimientos bajo la direccion inmediata del Ministerio de Instruccion Pública, en lo relativo á los programas y á las leyes que gobiernan estos establecimientos.

De manera que, propiamente, no se entregue al Concejo Nacional sino la parte administrativa y disciplinaria de estos establecimientos.

Los autores del proyecto tuvieron en cuenta que la escuela normal, sobre todo la escuela normal primaria, (que son las que existen, entre nosotros), es propiamente el coronamiento del edificio de la educacion primaria. De allí salen maestros hasta para las escuelas mas sencillas; salen inspectores de educacion; en una palabra, salen los agentes técnicos de que el Concejo de Educacion debe disponer, necesariamente, para el gobierno y la administracion de las escuelas.

Me parece que se consulta la buena armonia y la unidad de plan y de objeto en la educacion, haciendo que la formacion de estos que han de ser agentes del Concejo Nacional de Educacion esten en su enseñanza, bajo su vijilancia, bajo su reglamentacion. Es útil que dependa del Concejo mismo proveer y completar los términos en que han de desempeñarse determinados funcionarios y hasta reglamentar los mismo términos de su enseñanza, á fin de que pueda saber el número de maestros normales de que pueda disponer, para desempeñar las funciones de la inspeccion y demas cargos.

Pero el señor Ministro observará que en otro artículo, en un artículo final, se ha declarado que «las escuelas normales de las Capital seran sostenidas por el Tesoro Nacional y continuaran rigiéndose por los reglamentos y planes de estudio dictados por el Congreso y Ministerio de Instruccion Pública», etc.

Los autores del proyecto han comprendido pues que complacerian al señor Ministro quitandole la incomodidad de atender á la vijilancia de estos establecimientos, mientras que se respeta la direccion de sus estudios, los programas del Ministerio y las leyes que el Congreso dicte.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pero se pone, á lo menos una parte, en manos del Concejo: el nombramiento y la remocion del personal.

Sr. Leguizamon. (O.)—La propuesta, solamente; nada mas.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Por eso he dicho: en cierta parte.

Sr. Leguizamon (O.)—Es al señor Ministro á quien toca resolver en definitiva.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Por eso digo y lo repito: en cierta parte.

Sr. Leguizamon (O.)—La iniciativa! Es natural.

Sr. Ortiz—Como ademas el Gobierno nombra los cuatro vocales del Concejo,—quiere decir que es el mismo señor Ministro el que eso hará.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Si llamo la atencion de los señores Diputados sobre esto, no es porque quiera conservar y aumentar atribuciones del Poder Ejecutivo, sino porque me parece justa la indicacion.

Sr. Leguizamon (O.)—Fíjese que son funciones de vijilancia.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—¿En qué condiciones quedan las otras escuelas normales?

Sr. Leguizamon (O.)—Completamente gobernadas por el Ministerio.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—¿Pero los profesores que salen con el diploma de maestro?

Sr. Leguizamon (O.)—El señor Ministro los empleará en todas las escuelas de la Republica.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Respecto del Concejo de Educacion . . .

Sr. Leguizamon (O.)—El Concejo de Educacion no da títulos de maestros sino á los que, siendo particulares, quieran dedicarse á la enseñanza y se presenten á dar un examen.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pero los reconoce como maestros.

Sr. Leguizamon (O.)—Pero no espide títulos de maestros normales.

Los títulos de maestros normales solo los dá . . .

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Bien, no insisto . . . Sobre todo, porque hay un artículo en que no habia fijado mi atencion.

Pediria solamente que se agregara: *las escuelas normales de la Capital.*

Sr. Rojas (A. D.)—Está claro.

Sr. Leguizamon (O.)—Pero puede agregarse. No ha sido otra la intencion de los autores del proyecto.

Un Diputado—Y puede agregarse tambien: *los territorios nacionales.*

Sr. Leguizamon (O.)—Se ha tenido en cuenta. En un artículo se dice precisamente eso: *las escuelas normales que podrian crearse en los territorios nacionales.*

Sr. Presidente—Quedando aprobados los incisos que no han sido observados, se vá á

votar los incisos 2º, 21º, y 24º, en la forma aceptada por los autores del proyecto.

Sr. Lagos Garcia—Y creo que el señor Ministro no insiste en el inciso segundo.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Sobre todo, no me habia fijado que ya ha sido sancionado un artículo que necesitaria ser reconsiderado.

Sr. Rojas (A. D.)—Las modificaciones propuestas por el señor Diputado Ruiz de los Llanos fueron aceptadas, de la misma manera que las del inciso 24º.

Sr. Leguizamon (O.)—¿El señor Ministro quiere que pongamos; *en la Capital y en los territorios nacionales*?

Por mi parte no hay inconveniente. Tengo deseos de complacer al señor Ministro, aun cuando haya un poco de redundancia. ¿Como queda?

Sr. Secretario—Como estaba, con esta agregacion: *de la Capital, colonias y territorios nacionales*.

—Se pone á votacion el inciso 2º y es aprobado. Igualmente lo son los incisos 21 y 24.
—El artículo 56 es aceptado sin discusion.
—Se lee el 57.

Sr. Demaria—Pido la palabra.

Pido que se vote este artículo.

Sr. Leguizamon (O.)—Removerlos pueden.

Sr. Lagos Garcia—Pero removerá uno y le nombrarán otro que no es de su agrado.

Sr. Leguizamon (O.)—Y vuelve á removerlo.

Sr. Lagos Garcia—No podemos entrar en este sistema ecléctico, en esta compensacion de un sistema con otro.

Me parece que la accion del Poder Ejecutivo se fija, si no de una manera plena, mas que suficiente, con el nombramiento que hace por si solo de cuatro concejeros de cinco que componen el Concejo.

Cualquier inconveniente que en la práctica pueda suscitarse, por ejemplo, aunque no es presumible, que, el Concejo quisiera proceder en desacuerdo con sus deberes, puede ser corregido con la destitucion que el Poder Ejecutivo puede hacer por sí de cuatro concejeros y con el nombramiento de los que han de sustituirlos.

No es de esperar ningun peligro con esta independencia que queremos dar al Concejo, y que es necesario darle, por que sino, esta institucion no llenará los fines para que ha sido creada.

Es necesario que tengamos en cuenta los antecedentes de esta ley. La ley que está en vigencia en la Provincia, y que ha estado tambien en la Capital, establecia un solo Concejo . . .

Sr. Demaria—Y en todas las Provincias.

Sr. Lagos Garcia— . . . que mandaba todas las escuelas.

De este sistema de organizacion, de estas facultades limitadas que se han dado al Concejo, no se han cosechado sino buenos resultados.

Me parece que es muy peligroso cambiar este sistema, y que vamos á esponernos á hacer ineficaz é inutil una institucion en la cual ciframos todos las mas grandes esperanzas.

Por esta razon, quiero que la Cámara se persuada de que es este un asunto capital, de vital importancia para la institucion que vamos á plantear, y que se deje de estas mezquindades, estos escrúpulos del Poder Ejecutivo, sobre si á cada empleado de los que designa la ley ha de nombrarlo él, ó no.

Me parece que hay mas grandes propósitos, y que la Cámara no debe vacilar, en presencia de estas consideraciones, para dar una ley que llene los objetos que nos proponemos.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pido la palabra.

Yo no dudo que hay una garantia tomada cuando se pretende que el nombramiento sea hecho en la forma que indican los señores Diputados.

Pero no desaparece esa garantia, cuando se toma la precaucion de que los nombramientos sean hechos á propuesta del Concejo de Educacion.

No creo que sea una nimiedad insistir sobre este punto, por que se trata de atribuciones del Poder Ejecutivo, que nombra los empleados de la administracion, y no es tan sencillo quitarle esas facultades, cuando sin quitarselas se pueden obtener las mismas ventajas y todas las garantias necesarias.

Estas garantias estan obtenidas con la sola propuesta que puede hacer el Concejo de Educacion. Si el Poder Ejecutivo no acepta un candidato, el Concejo presenta otro, y si tampoco admite ese, propone un tercero; porque no es posible suponer que se vaya en este antagonismo hasta mas allá de lo conveniente, que será reconocido por el Concejo y por el Poder Ejecutivo tambien.

Por esto pediria que se conservara el artículo tal como ha sido propuesto por los señores que firman el proyecto.

Sr. Demaria—La Cámara me ha de escusar si insisto en esto.

No es cierto que por la Constitucion todos los empleados de la Nacion deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo. He recor-

dado al señor Ministro que hay funcionarios públicos que la ley manda que sean nombrados con acuerdo del Senado y que el Poder Ejecutivo ha aceptado y reconocido como constitucionales esas leyes.

No debe, pues, insistir el señor Ministro en que la Constitución establece que todos los empleados deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo. La interpretacion recta del artículo constitucional es que el Poder Ejecutivo debe nombrar todos los empleados de la administracion que á él está confiada, no de las otras administraciones ni de los otros ramos del poder público.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—¿No le está confiada la administracion, en esta parte? Yo creo que sí.

Sr. Demaria—Esta administracion no es á la que se refiere la Constitución.

Tan es así, que no es el caso de los empleados á que se refiere la Constitución, que en las leyes que el Congreso ha dictado hay otra porcion de casos de empleados públicos, respecto de los cuales no hay disposicion ninguna en la Constitución que establezca que deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo, y, sin embargo de esto, son nombrados por los otros poderes públicos, sin que jamas el Poder Ejecutivo les haya hecho cuestion al respeto.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pero son escepciones.

Sr. Demaria—Como lo es esta.

Me parece inconveniente el nombramiento por el Poder Ejecutivo, y creo que la manera mas acertada seria dejarlo encomendado al Concejo de Educacion, que es el que tiene mas competencia y está en inmediato contacto con las personas de la profesion.

Sr. Leguizamón (O.)—Pido la palabra.

No es precisamente para contestar al señor Diputado, sino para pedir que se consigne en este artículo una aclaracion que reputo indispensable. Pido que se agregue:

«Con escepcion de los preceptores, subpreceptores y ayudantes de las escuelas primarias, cuyo nombramiento será hecho por el Concejo Nacional de Educacion.»

Propongo esto.

Sr. Demaria—Me parece que está salvado lo que desea el señor Diputado, desde que este artículo termina diciendo: *con escepcion de aquellos etc.*

Sr. Leguizamón (O.)—Pero no está claramente determinado, y esto mismo habia hecho nacer dudas en el ánimo de algunos señores Diputados, que creian que nos habiamos propuesto facultar al P. E. para

que hiciera tambien los nombramientos de los maestros de escuela.

Sr. Figueroa (F. J.)—Entonces, quiere decir que el P. E. queda solamente facultado para nombrar los porteros?

Sr. Leguizamón (O.)—No, señor, el Poder Ejecutivo nombrará los inspectores y los demas empleados.

Sr. Figueroa (F. J.)—Pero el señor Diputado quiere que se diga: «El nombramiento de todos los empleados de la direccion, etc., se hará á propuesta del Concejo Nacional de Educacion, con escepcion de los preceptores, subpreceptores y ayudantes de las escuelas, que los nombrará el Concejo.

¿Cuales serán entonces los que nombrará el P. E.?

Sr. Leguizamón (O.)—Nombrará todos los demas empleados del Concejo.

Sr. Figueroa (F. J.)—Pido que se vote por partes el artículo.

—Se lee el artículo en discusion:

—Art. 57. El nombramiento de todos los empleados de la direccion y administracion de las escuelas normales y primarias, se hará por el Poder Ejecutivo á propuesta del Concejo Nacional de Educacion, con escepcion de aquellos cuya provision estuviese determinada de una manera diversa por esta ley.

Sr. Leguizamón (O.)—La última parte: con escepcion de aquellos cuya provision estuviese determinada de una manera diversa en esta ley», se refiere al nombramiento del Presidente del Concejo y de los concejeros.

Sr. Demaria—Pido que se vote hasta la palabra se *hará*, votando en seguida: *por el Poder Ejecutivo.*

Deseo que el nombramiento de todos estos empleados sea hecho por el Concejo Nacional de Educacion.

Me parece lo mas impropio é inconveniente que estos inspectores, que deben depender directamente del Concejo y que deben tener aptitudes especiales, sean nombrados por el Poder Ejecutivo, que no está en aptitud de poderlos conocer como los que directamente administran este ramo de la instruccion.

—El señor Ministro de J. C. é I. P. interrumpe en voz baja.

Si el señor Ministro encuentra que sea conveniente que el Concejo los proponga al Poder Ejecutivo por las razones que estoy dando, entonces no puede dejar de encontrar que tambien es conveniente que sean directamente nombrados por el mismo Concejo, puesto que el Poder Ejecutivo puede separarse de la propuesta que haga el Concejo y nombrar á otras personas que no reúnan estas condiciones de aptitud que reunirian las personas que propusiera la Direccion.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Respecto de las escuelas normales ya está establecido.

Sr. Figueroa (F. C.)—Yo propongo otra modificación, y es esta: *El nombramiento de los empleados de la dirección y administración de las escuelas normales y primarias se hará por el Poder Ejecutivo, previa una terna presentada por el Concejo Nacional de Educación.*

Sr. Leguizamon (O.)—Es el pensamiento del proyecto: á propuesta del Concejo.

Sr. Figueroa (F. C.)—Pero es que el señor Diputado dice que puede el Poder Ejecutivo separarse de la terna propuesta por el Concejo.

Sr. Leguizamon (O.)—Entonces no nombraría á propuesta, sino por su cuenta y riesgo.

Sr. Lagos Garcia—Pido la palabra.

Quiero manifestar que desde el principio he estado en esta materia con las opiniones del señor Diputado por la Capital.

Cuando mi colega el señor Diputado por Entre Rios, habló de las facultades del Concejo General de Educación en estos asuntos, me limité á manifestar que debíamos exigir que el presupuesto del Concejo de Educación fuese sometido á la aprobacion del Congreso, en contraposicion de lo que parecia deducirse del proyecto de la Comision del Culto, que parecia autorizar al Concejo para dictarlo.

Sr. Demaria—No es ese el pensamiento del proyecto.

Sr. Lagos Garcia—Yo no comprendo un Concejo de Educación, con una vida un poco independiente, como queremos darle por esta ley, y como es necesario que se le dé para que esta institucion tenga eficacia; yo no comprendo una institucion de esta naturaleza, en que el Poder Ejecutivo nombre secretarios, contadores, escribientes, etc.

Es imposible que el Concejo tenga buena administracion, es imposible que pueda vigilar á los empleados, es imposible que pueda fiscalizar el manejo de los caudales que se emplean, si no tiene la facultad de nombrar y remover por sí á estos empleados.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Cuando no se trata de grandes grupos de empleados.

La regla general, es que el Presidente de la República nombre los empleados de la Administracion; lo demas es la escepcion.

Cuando se quiere tomar garantias respecto al nombramiento de un superintendente, de un alto empleado, convenido; pero cuando se trata de grandes grupos de empleados, no me parece que sea tan sencillo.

Sr. Calvo—¿El señor Ministro acepta á propuesta del Concejo?

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Sí, señor.

Sr. Demaria—Tan es cierto eso, que creo que en todas las constituciones de Provincia existe esta misma cláusula: que el Poder Ejecutivo es el que hace el nombramiento de todos los empleados públicos; y, sin embargo de eso, en todas las Provincias de la República en que hay una ley de educacion, se establece que los empleados de esta rama serán nombrados por el Concejo General de Educación.

Solo una Provincia argentina se exceptúa de esta regla. Y esa Provincia es la escepcion, por razones que tal vez no deberia dar. . . porque, cuando se dictó la ley, la Cámara. . . en fin, estaba subordinada. ó se inspiraba demasiado en las ideas del Poder Ejecutivo de esa Provincia.

Esta es la única razon.

Sr. Figueroa (F. J.)—¿Qué Provincia?

Sr. Demaria—Entre-Rios.

Sr. Figueroa (F. J.)—La de Córdoba tambien.

Sr. Ocampo—Es que Córdoba no tiene ley de educacion.

Sr. Figueroa (F. J.)—Si la tiene.

Sr. Ocampo—No se conoce.

Sr. Figueroa (F. J.)—No la conocerá el señor Diputado, porque no conoce nada de Córdoba!

Sr. Presidente—El único que tiene la palabra, es el señor Diputado Demaria.

Sr. Demaria—En Estados Unidos, que á cada paso nos sirve de modelo, en la ley de educacion se establece que los nombramientos de todos los funcionarios que tienen algo que hacer con la instruccion primaria, sea hecho por el Concejo General; y si, como ha dicho el señor Diputado Doctor Lagos, si se quiere crear un poder, sino absolutamente independiente, por lo menos que goce de alguna independencia para que pueda administrar debidamente bien, para que pueda establecer la base de la verdadera educacion, es necesario que este punto no dependa del Poder Ejecutivo.

De otra manera, no se conseguirá que la educacion marche como debe marchar en la República; habria de estar siempre subordinada á la accion del Poder Ejecutivo.

Los señores Diputados deben saber lo que ha pasado en otras naciones ilustradas: se ha tratado de dar toda la independencia posible de los poderes públicos de la Nacion, á esta rama.

Como se ha dicho ya ¿es posible que al Presidente de un concejo como este se le nombre por el Poder Ejecutivo hasta el secretario, es decir hasta aquella persona que debe ser de la confianza é intimidad del Presidente, aquella persona que necesita tener

conocimientos especiales para poder desempeñar bien su puesto?

Sr. Ministro de J. C. é I. P. — Por eso se le da la facultad de proponerlo.

Sr. Demaria—¿La facultad de proponer? Se está diciendo que la facultad de proponer importa la de obligar al Poder Ejecutivo á nombrar algunas de las personas que se propone. Esto no es cierto. «Cuando la ley dice el Poder Ejecutivo nombrará á propuesta del Concejo», no quiere decir que está obligado á nombrar los que el Concejo le propone.

Sr. Ministro de J. C. é I. P. — Tampoco es cierto esa suposicion: que siempre han de estar en antagonismo.

Sr. Demaria— Son simples suposiciones, pero que no quiero que puedan realizarse.

Sr. Ortiz—El peligro no es el antagonismo: es la influencia que el Poder Ejecutivo va á ejercer de una manera directa sobre el Concejo, para hacerle proponer los empleados que se le antoje.

Precisamente, la independencia del Concejo está en no someterle mas á la accion del Poder Ejecutivo.

Sr. Demaria—Por otra parte, si el Poder Ejecutivo entiende la ley como la entiende el Sr. Ministro de nombrar siempre lo que pondrá el Concejo, no habria porque adoptar ese temperamento, de nombrar á propuesta del Concejo; no habria razon para no dar esa facultad al Concejo.

Sr. Ministro de J. C. é I. P. — Por que del otro modo se atiende á la prescripcion, que es la regla general, de que el Presidente nombre los empleados de la Administracion.

Por eso, sencillamente.

Sr. Leguizamon (O.) — Pido la palabra.

Voy á decir dos palabras, para no pasar en silencio la discusion que se tiene sobre este punto, puesto que los señores Diputados que firmaron el proyecto han salvado su opinion en gran número, y me dejan con una responsabilidad muy limitada en su redaccion.

Se trata de funciones enteramente administrativas, señor Presidente, y por consiguiente, yo no creo que pueda sostenerse con razones serias, que no corresponde única y esclusivamente al Poder Ejecutivo el nombramiento de los empleados.

Sr. Gilbert — Oh! seria poner á esta Cámara como aquella de Entre Rios que dice el señor Diputado por la Capital que respondia al Poder Ejecutivo.

Debe darse absolutamente el nombramiento al Concejo de Educacion, so pena que el Congreso se declare sometido al Poder Ejecutivo.

Sr. Leguizamon (L.) — Si esa idea fué rechazada, seria porque habia una mayoria en contra.

—Los señores Leguizamon (L) y Gilbert cambian algunas palabras que no se oyen.

Sr. Zeballos — Estan haciendo historia vieja de Entre Rios!

Sr. Leguizamon (O.) — Yo creia que era una interrupcion que se me hacia, y estaba dispuesto á oirla. Pero continuó.

Decia, señor Presidente, (y he declarado que voy á decir solamente unas cuantas palabras, con el único objeto de sostener la conviccion que tengo respecto de la fórmula propuesta), decia que se trata de una institucion puramente administrativa; y, tratandose de empleados administrativos, yo creo que no se puede negar al Poder Ejecutivo el derecho de hacer los nombramientos, con arreglo á los articulos citados de la Constitucion.

Si hay conveniencia en dejar al Concejo el nombramiento de estos empleados ó en que lo haga el Poder Ejecutivo, á propuesta del Concejo, es otra cuestion.

Tal vez, si se eliminase la cuestion de principios, yo estaria completamente de acuerdo, y me alegraria mucho de estarlo, con los autores del proyecto que se hallan en divergencia en este punto.

Pero debo declarar tambien que el Concejo ha sido en gran parte desnaturalizado del pensamiento que lo creó por el proyecto; y recuerdo á los señores Diputados que me hicieron la honra de acompañarme á suscribirlo, que piensen en esta consideracion: en el plan de este proyecto, no solo el Concejo estaba controlado, en este acto, por los concejos de distrito, que una sancion de la Cámara ha desnaturalizado, reduciendolos á simples empleados de ese Concejo, sino que ademas se ha variado la misma composicion del Concejo, que el proyecto proponia que fuese compuesto de persona con cualidades facultativas, y que por la sancion de la Cámara queda reducido á cuatro ó cinco personas civiles, que tal vez no tengan ninguna inteligencia.

—Un señor Diputado interrumpe en voz baja.

Sr. Leguizamon (O.) — Estoy recordando á la Cámara cuales son sus sanciones, para hacerle presente que por el pensamiento primitivo del proyecto—hoy desnaturalizado por las sanciones que ha recibido en estos dos puntos—la facultad atribuida al Poder Ejecutivo, no importaba ningun peligro.

Se ha contestado que el Poder Ejecutivo tiene derecho de nombrar cuatro de los concejeros; pero tambien olvidan los señores Diputados que esos concejeros son inamovi-

bles durante cinco años, mientras dure su buena conducta y sus aptitudes físicas é intelectuales para el desempeño de su puesto, —lo cual garante su independencia.

Sr. Lagos Garcia—No se puede decir que son verdaderamente inamovibles.

Sr. Leguizamon (O.)—Lo son en el hecho, señor Diputado.

Cuando un empleo es garantido por cierto tiempo, puede decirse inamovible; y por eso dispone en el artículo: duraran cinco años mientras dure su buena conducta.

Sr. Rojas (Ab.)—A juicio del Poder Ejecutivo.

Sr. Leguizamon (O.)—Entonces, digo: estas son las razones que, por lo que á mi toca, tenia y conservo para votar en favor de la forma del artículo propuesto.

Si los señores Diputados creen que despues de la desfiguración que ha recibido el proyecto, en lo que se relaciona á la formación del Concejo, todavia es necesario dar á este Concejo la facultad de nombrar todos los empleados del ramo de instruccion que tiene á su cargo, en presencia del Congreso mismo,—que ellos carguen con todo el peso de la responsabilidad que impone una sancion de tal naturaleza.

Por mi parte, salvo mi propia responsabilidad.

Sr. Lagos Garcia—Pido la palabra.

Yo creo que los que sostienen la facultad del Poder Ejecutivo para hacer estos nombramientos, no pueden estar muy seguros en la cuestion de principios, porque si estuviesen suficientemente seguros en esta cuestion, su lógica los llevaria á no aceptar ninguna escepcion á estos principios.

Yo creo, por ejemplo, que el señor Diputado por Entre-Ríos—que con tanto calor defiende la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar todos los empleados de la educacion, lo mismo que el señor Ministro de J. C. é I. P., que defiende tambien esa facultad,—ha accedido á la idea de que el Presidente del Concejo de Educacion, (empleado administrativo segun ellos) sea nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado;—es decir, se pone al Poder Ejecutivo una de las limitaciones contra las cuales protesta el mismo señor Diputado.

Señor Presidente: cuando la Constitucion dice: *Los empleados de la Administracion*, todos sabemos lo que se entiende por esta palabra *Administracion*.

Yo no podria dar una definicion suficientemente técnica en este momento, porque para esto se requiere tener condiciones de profesorado de que carezco; pero me parece que todos los señores Diputados entienden, cuando se habla de empleados de la Admi-

nistracion ejecutiva, cuales son mas ó menos las reparticiones de la Administracion á que estas palabras se refieren.—Son, por ejemplo aquellas reparticiones necesarias para la percepcion y para la inversion de la renta; son las necesarias para mantener las relaciones exteriores; son todas las necesarias para la Administracion del ejército, enfin, para aquellos ramos de Administracion sin los cuales un país no puede existir.

Pero una nacion puede muy bien existir, Sr. Presidente, sin tener universidades costeadas por el Estado. La Inglaterra no las tiene: son allí personas jurídicas, corporaciones constituidas con leyes especiales.

Una nacion puede tener administracion sin tener banco. Muy pocas son las naciones que tienen Banco Nacional.

Una nacion tambien puede tener administracion sin tener Concejo de Educacion. El Señor Diputado Calvo lo ha de saber perfectamente.

Sr. Calvo—Siento decirle que en Inglaterra he visto que hay un Concejo de Educacion en cada distrito.

Sr. Lagos Garcia—Será ahora últimamente.

Sr. Calvo—Sí, últimamente.

Sr. Lagos Garcia—Pero por muchísimos años no ha habido allí Concejo de Educacion.

Sr. Calvo—Pero ahora los hay, y se llaman *School Boards*.

Sr. Lagos Garcia—Perfectamente. La Inglaterra no lo ha tenido por largos años, y sin embargo ha sido modelo de administracion.

Por consiguiente, tal reparticion no puede ser considerada como formando parte de la Administracion, y por lo tanto, no está comprendida en el artículo constitucional, que se refiere á oficinas de otra naturaleza.

A este respecto conservo un recuerdo, Sr. Presidente, de algo que ví precisamente cuando empecé á formar parte de los cuerpos deliberantes

Acababa de entrar á la Cámara de Diputados de la Provincia.

La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires tenia un artículo exactamente igual á este: El Gobernador de la Provincia nombrará todos los empleados de la Administracion.

Se habia presentado entonces á esa Cámara, por uno de sus miembros, un proyecto organizando el Directorio del ferro-carril del Oeste, proyecto en el que se daba al Directorio la facultad de nombrar el Gerente y varios empleados del ferro-carril.

El Sr. Ministro de Hacienda, que concurrió al debate, por ser asunto concerniente al

Ministerio de su ramo, se oponia con los mismos argumentos espuestos aqui, y algunos Diputados le contestaban, poco mas ó menos, con las mismas razones que aqui se han hecho valer.

La Cámara, llegado el caso de votar, resolvió que ese ferro-carril se constituyera de la manera que todos conocemos, y de lo cual la Provincia de Buenos Aires no ha tenido mas que motivos para felicitarse.

Es imposible, Sr. Presidente, que cuando se trata de dar á esta Administracion una existencia semi-independiente, para llenar los fines á que está destinada, pueda ella soportar en todos sus detalles la intromision del Poder Ejecutivo, que, por mas buena voluntad que tenga, ha de chocar al fin con los hombres que compongan el Concejo, viniendo en seguida, como consecuencia, las resistencias, la falta de armonia y aun el descuido en el importante ramo de la educacion, cuya estabilidad y órden es indispensable conservar.

Me parece, Sr. Presidente, que estas razones no pueden ser contestadas satisfactoriamente; y sobre todo, creo que si alguna duda pudiera haber en el ánimo de la Cámara sobre el derecho que tiene para dictar la ley en el sentido que sostengo, en tal caso de duda debia ella inclinarse á favor de los que sostenemos estas doctrinas, porque estas doctrinas son las únicas que pueden hacer fructifera la institucion que tratamos de establecer.

Sr. Leguizamón (L.)—Hago mocion para que se cierre el debate.

Sr. Calvo—Pido la palabra.

He oido con atencion las observaciones hechas por el señor Diputado por Buenos Aires y á mi entender son correctas refiriéndose á otros paises.

Por ejemplo, en los Estados-Unidos, ni en la Constitucion se habla con relacion á esto como no se habla con relacion á la religion. ¿Porqué? Porque cada Estado de la Union promulga las leyes locales que quiere; y asi la legislacion varia segun los treinta y ocho estados que componen la Nacion.

En Inglaterra, el *School Board* es institucion que existe en cada distrito, en cada condado.

Pero en mi país, en la República Argentina, el artículo constitucional es terminante; dice: el Poder Ejecutivo nombrará *todos los empleados de la Administracion*; y no escluye ni la administracion de la educacion, ni ningun otro ramo de la administracion general.

Sin embargo, yo no estoy por lo absoluto.

No me gustaria que el Poder Ejecutivo tuviera el derecho de nombrar todos los empleados de las escuelas; y encuentro un temperamento muy hábil el aconsejado por los señores

que firman este proyecto, al decir: «á propuesta del Concejo de Educacion.»

Así es que, tomando en consideracion el pro y el contra de todo lo que se ha dicho, me parece el artículo que está en discusion perfectamente completo.

«El nombramiento de todos los empleados de la Direccion y administracion de las escuelas normales y primarias se hará por el Poder Ejecutivo. . . . Esto es eminentemente constitucional.

Pero agrega: «á propuesta del Concejo Nacional de Educacion». Es decir, á propuesta de aquellos que pueden conocer los cauditados que son mas aptos y mas idóneos para llenar esos cargos.

Está completo, á mi entender, cuanto puede exigirse, dado el caso de nuestras leyes tales cuales son.

Prácticamente queda á merced del Concejo Nacional de Educacion el nombramiento de los empleados. El Poder Ejecutivo no vá á rechazar á nadie, porque presumirá, como todos presumimos, que el Concejo de Educacion sabe cuales son los hombres que le presenta, cual es su idoneidad, cuales son sus aptitudes para ese empleo.

Sr. Dávila—Prácticamente vá á resultar otra cosa.

Sr. Calvo—Prácticamente, vá á ser el Concejo Nacional de Educacion el que vá á nombrar esos empleados. No hay que hacerse ilusiones.

El Ministro ni nadie del Poder Ejecutivo vá á decir al Concejo de Educacion: No queremos este empleado. Va á aceptar el que el Concejo le indique.

Esta es la garantia que veo en el resorte del nombramiento de todos los empleados, y es que el Concejo Nacional ha de hacer la propuesta de los candidatos.

Aquí está perfectamente determinado que es lo que podemos hacer, porque, repito, constitucionalmente yo no me atreveria á votar en contra de que el Poder Ejecutivo nombre los empleados; pero acepto con mucho gusto esta limitacion—porque es una limitacion, aunque indirecta—esto que establece la ley, de que haga la propuesta el Concejo Nacional de Educacion.

Así me parece que estan perfectamente llenadas todas las aspiraciones que podamos tener los que deseamos que esta sea una institucion durable y que al mismo tiempo sea benéfica en todos los puntos que tenemos en vista para promulgar esta ley.

Agrega, sin embargo, el artículo, «con escepcion de aquellos cuya provision estuviese determinada de una manera diversa», puesto que no hace mas que respetar lo que ya está hecho.

Esto quiere decir que lo que está sancionado en la ley no se reconsidera, ni se pasa por encima de la ley.

Me parece legítimo.

Señor Presidente: soy de opinion que debe votarse por la afirmativa el proyecto tal cual está.

Sr. Rojas (Abs.)—Hago mocion para que se cierre el debate, votándose por partes el artículo.

—Apoyado.

—Se cierra el debate.

Sr. Presidente—Se votará por partes el artículo como se ha pedido.

—Se vota por partes el artículo, y se rechaza.

Sr. Presidente—Ahora la Cámara resolverá si toma en consideracion inmediatamente el artículo propuesto por el señor Diputado por Entre-Ríos, ó si pasa á Comision.

Sr. Olmedo—Lo que se debe votar es la mocion del señor Diputado Demaria, ó el artículo propuesto del proyecto, que ha sido el que ha merecido el apoyo de los Diputados, y que fué presentado antes que el formulado por el señor Diputado Leguizamon.

Sr. Ocampo—Rechazado ese, se debe votar el del señor Leguizamon.

Sr. Presidente—La Cámara resolverá si desea tomar inmediatamente en consideracion el artículo propuesto por el señor Leguizamon.

Sr. Demaria—Observo que primero fué propuesto el mio.

Sr. Presidente—La Secretaria me informa que el señor Diputado Leguizamon hizo mocion con anterioridad al señor Diputado Demaria.

Sr. Demaria—Está equivocada; y apelo al testimonio del mismo señor Leguizamon.

Sr. Leguizamon (O.)—Yo lo diria oyendo leer el artículo.

Sr. Secretario—El artículo propuesto por el señor Leguizamon es el siguiente:

Agregar al artículo 57 despues de «Concejo Nacional de Educacion», lo siguiente: *preceptores, sub-preceptores y ayudantes de las escuelas normales, que seran nombrados por el Concejo Nacional de Educacion.*

Sr. Leguizamon (O.)—Ahora yo no insisto en que se ponga esto á discusion.

Sr. Presidente—Se leerá el artículo en la forma propuesta por el señor Demaria.

—Se lee en esta forma:

El nombramiento de todos los empleados de la direccion y administracion de las escuelas primarias se hará por el Concejo Nacional de Educacion, con escepcion de aquellos cuya provision estuviera determinada de una manera diversa por esta ley.

Sr. Leguizamon (O.)—¿Se comprenden tambien los preceptores y sub-preceptores?

Sr. Demaria—No está comprendido nada de eso. Por esta razon: porque la terminacion del artículo dice:—«con escepcion de aquellos cuyo nombramiento estuviera determinado de otra manera».

Como en esta misma ley se establece que los preceptores y sub-preceptores han de ser nombrados en otra forma, se sigue que no es necesario establecerlo.

Sr. Leguizamon (O.)—Si no está determinado!

Sr. Presidente—La Cámara resolverá si toma inmediatamente en consideracion el artículo propuesto por el señor Diputado Demaria.

—Así se resuelve

—Se pone en discusion el artículo.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pido la la palabra.

Creo de mi deber, señor Presidente, á pesar de que no desearia prolongar el debate, impugnar este artículo, que, en mi opinion, no puede aceptarse.

La diversa apreciacion que puede hacerse de lo que significa la palabra *administracion*, no tiene bastante claridad como para imponer una decision terminante, en el ánimo de los señores Diputados.

Yo entiendo que en virtud de la prescripcion constitucional, está en su derecho el Poder Ejecutivo, al exigir que se le conserven las facultades que tiene por la Constitucion.

No puedo creer que sea una escepcion, por ejemplo, el nombramiento de un contador para una rama cualquiera de la administracion; que pase este por un elemento indispensable para la educacion, y que, en tal sentido, pueda ser separado, desprendido de la dependencia del Poder Ejecutivo, cuando tenemos la cláusula constitucional que dice que el Poder Ejecutivo nombra los empleados de la administracion.

Si hay algo que es de administracion, es precisamente el manejo de los fondos, ya sea que estos fondos sean entregados á un Concejo, para ser distribuidos entre los maestros, ya sea que esa entrega se haga á un administrador de aduana, para ser distribuidos despues entre sus empleados. Todo esto es administracion.

La educacion comun es una rama de la administracion; no está indicado en ninguna parte que sea una escepcion, ni que deba serlo.

Por consiguiente, yo creo que se sustrae, pues, parte de las facultades del Poder Ejecutivo cuando se hace la escepcion que parece que quiere hacer la mayoria de la Cámara en este momento.

Comprendo bien que se diga: el Poder

Legislativo, la Corte Suprema, nombran sus empleados; pero no, que de una rama se haga una especie de poder aparte, dándole atribuciones que la Constitucion da al Poder Ejecutivo de hacer el nombramiento de los empleados; empleados que, aun cuando pertenezcan á la educacion, como por ejemplo en este caso, son de la administracion.

¿Qué tiene que ver un contador, con la instruccion, á pesar de ser contador del Concejo de Educacion?

Es un empleado de la administracion; no puede ser desprendido del poder que tiene sobre él, por la cláusula constitucional, el Presidente de la República.

Yo no quisiera que se creyese que en este caso defendiendo por un interés pequeño una cosa que creo que es facultad del Poder Ejecutivo; creo que tiene sus inconvenientes estar desprendiendo á cada momento, con un motivo ó con otro, partes de esta facultad.

Yo comprendo, sin embargo, que en algunos casos, el Congreso quiera tomar garantias; cuando se trata de empleados superiores como ya he manifestado; y aun esto mismo suscita en mí, lo declaro con toda ingenuidad, escrúpulos verdaderos, aun cuando reconozco la conveniencia. Será defecto del artículo constitucional; pero así lo entiendo.

Creo que en esto ha entrado tambien un poco la moda. Antes no habia esta tendencia á hacer nombramientos de empleados con acuerdo del Senado: la moda fué introducida en la Provincia de Buenos Aires despues de dictada la Constitucion, y creo que de allí ha emigrado un poco; creo que ya se está haciendo demasiado general. En algunos casos, es conveniente; pero cuando se trata ya de grandes grupos de empleados, me parece que realmente se invaden atribuciones del Poder Ejecutivo.

Yo creo de mi deber hacerlo notar así á la Cámara.

No quiero fatigarla mas, por eso no continuo.

—Se retira á las antecalas el señor Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública.

Sr. Enciso—Pido la palabra.

Deploro que se haya retirado en este momento el señor Ministro del Culto, porque hubiera deseado que oyera el argumento que voy á hacer, para fundar mi voto en favor del artículo que se acaba de leer.

Como hay un principio de la Constitucion comprometido en la discusion, y creo que comprometido seriamente en ella, yo voy á recordar á la Cámara un caso que resuelve la cuestion por completo.

El Congreso ha dictado una ley creando la Municipalidad de la Capital. Es una rama

de la Administracion, y una rama de la Administracion tan seria como cualquier otra. Pues bien! en esa ley ha hecho de la Municipalidad un cuerpo autonómico, que tiene la facultad de nombrar todos sus empleados.

Del mismo modo que ha creado la Municipalidad, puede crear el Concejo de Educacion con toda la autonomia que crea necesaria para su existencia; y, como consecuencia natural de ello, puede atribuirle, como atribuyó á la Municipalidad de la Capital, la facultad de nombrar todos los empleados.

Esto fué aceptado por el Poder Ejecutivo, sin observacion de ninguna clase; esto no fué ni contestado por el Poder Ejecutivo, por medio de sus Ministros, en el recinto de las Cámaras. Por consiguiente, está completamente fundado el artículo; es perfectamente constitucional y he de votar por él.

—Se aprueba por 26 votos contra 19, el artículo en discusion.

Se lee el artículo 58:

«Todos los miembros del Concejo Nacional de Educacion son personalmente responsables de la mala administracion de los fondos correspondientes á la educacion comun, procedente de actos en que tuviesen el deber de intervenir. La accion que procede en tales casos será pública, y durará hasta un año despues de haber cesado en sus funciones cada uno de los miembros del Concejo.»

Sr. Leguizamón (O.)—Debe ponerse en que hubiesen intervenido ó tuviesen el deber de intervenir.

—Se dá por aprobado con la correccion indicada.

—Son aprobados los artículos 59, 60, 61, 62 y 63.

—Se entra á la consideracion del artículo 7°. Bibliotecas populares, aprobándose los artículos 64, 65, 66 y 67.

—Se pasa al Capítulo 8°. Escuelas y Colegios Particulares, poniéndose en discusion el artículo 68.

Sr. Argento—Pido la palabra.

Yo pediria que se votara este artículo.

He de votar en contra de él, porque creo que ataca la libertad de enseñanza, desde el momento que exige para los maestros particulares el requisito de tener diplomas otorgados por el Gobierno.

Esto echa por tierra la garantia establecida por la Constitucion.

Sr. Lagos Garcia—Pido la palabra.

Para hacer presente á la Cámara que sobre este artículo tuvimos la desgracia de estar en desacuerdo algunos de los Diputados que firmamos el proyecto en discusion.

Yo, por ejemplo, lo mismo que varios otros de mis compañeros, creiamos que no era conveniente esta prescripcion; que la exigencia primordial del país, en materia de educacion, era que la instruccion fuese lo mas difundida posible, y que, por consiguiente, no habia utilidad y si, por el contrario, perjuicio, en poner estas condiciones; que aun cuando tienen una relacion lógica y acen-

tuada en la ley, llevan en sí, sin embargo, el inconveniente práctico de dificultar la planeación de nuevas escuelas y aun la permanencia de las existentes.

Es sabido que muchos de los que dirigen las escuelas existentes no tienen estos diplomas de maestros; y, por consiguiente, la exigencia que la ley, por medio de estos artículos, impondría, les obligaría en algunos casos á cerrar sus escuelas, impidiendo á la vez que se abriesen otras nuevas, por razón de no tener los maestros título legal que acreditase su capacidad.

Sin entrar á discutir la cuestión sobre si el Estado tiene ó no derecho de exigir en una ley de educación estas condiciones para dirigir las escuelas privadas, varios de los Diputados que firmamos este proyecto estuvimos en desacuerdo por esta consideración principal y capital á mi modo de ver: es conveniente facilitar por todos los medios posibles, la difusión de la enseñanza; por consiguiente, cualquiera restricción que tienda á impedir la difusión de esa enseñanza, es un inconveniente en el estado actual de las cosas.

No se nos ocultaba tampoco una prescripción de la Constitución que podría argüirse contra estas disposiciones: la que reconoce á todos la facultad de *enseñar y aprender*; y aunque sabíamos también que á estas consideraciones podría contestarse con que los derechos establecidos por la Constitución pueden ser reglamentados por leyes del Congreso, creíamos que, en atención á las consideraciones capitales que he apuntado, no debíamos poner en la ley una disposición que vendría, hasta cierto punto, á afectar derechos que entendíamos debían en todo caso ser respetados.

Hemos manifestado ideas completamente liberales al tratar de la educación; y no creíamos que debíamos ponernos en contradicción con estos principios, estableciendo aquí una limitación que podría considerarse como una restricción de la libertad de enseñanza.

Estas son las razones que tuvimos algunos para disentir con otros de mis honorables colegas firmantes del proyecto; y por eso voy á votar en contra del artículo leído.

He dicho.

Sr. Leguizamón (O.)—Pido la palabra.

No deseo hacer una larga discusión sobre este punto; sin embargo de que creo que la Cámara debe apercibirse que no tiene el asunto tanta sencillez como parece á primera vista.

Se trata, señor Presidente, nada menos que del régimen que debe prevalecer en las escuelas particulares de enseñanza primaria, entregadas en la actualidad á lo que se llama

ma *colonias extranjeras*, en Buenos Aires principalmente; á corporaciones religiosas; por otro lado, al empirismo mas grosero é ignorante en un sentido general.

Señor Presidente: el magisterio particular es el refugio de todos los holgazanes.

Un hombre llega á nuestro país; no conoce nuestro idioma; no tiene profesión; no tiene ciencia,—pero sabe que puede ser maestro, y abre una escuela y pone al frente un gran cartel: *Escuela pública de niños y niñas*.

Los principios serios que han presidido al régimen de esta ley, en que se comienza por hacer obligatoria la enseñanza no solo en las escuelas públicas sino también en las escuelas particulares y aun en el hogar de los padres, dentro de un límite determinado de conocimientos, exijan, como una necesidad, establecer las condiciones que debiera tener el encargado de la dirección de los establecimientos de educación.

Y colocándonos á la vanguardia de los principios mas adelantados en esta materia, hemos declarado que el maestro de la escuela particular como el de la escuela oficial, debe tener competencia técnica para enseñar los ramos obligatorios y, además, capacidad física, es decir: que no debe ser un leproso, ó un hombre cuyo aspecto inspire repugnancia ó desagrado á sus discípulos. Todavía hemos ido mas lejos: hemos establecido que ese maestro debe tener condiciones de moralidad caracterizadas y comprobadas; que no debe ser una persona de malas costumbres que sirva de piedra de escándalo en la escuela, lejos de desempeñar una misión tan noble como es la confiada al maestro.

Hemos ido mas lejos: hemos exigido que el maestro sepa hablar bien el idioma del país, porque comprendemos que sin él no se puede enseñar bien, ni los ramos que se relacionan con la educación puramente literaria que el país necesita, ni mucho menos los que se relacionan con sus instituciones.

Tratamos de educar ciudadanos; y para educar ciudadanos es necesario que el maestro tenga, no solo condiciones de ciencia determinadas, sino condiciones de moralidad, condiciones de aptitud física para el ejercicio de este magisterio.

Entre los medios ordinarios de transmitir buena enseñanza, figura el conocimiento completo del idioma del país.

Sr. Argentó—Para los maestros oficiales.

Sr. Leguizamón (O.)—El maestro particular no está fuera de esta regla; no puede estar fuera de esta condición si somos consecuentes con los principios proclamados.

Si lo estuviese habríamos abierto en la misma ley la puerta mas grande que puede abrirse en ella para violar nuestras disposiciones.

Entonces, si tomamos, en la escuela oficial las precauciones necesarias para tener la enseñanza de la verdad, la enseñanza seria de los principios que contiene el proyecto, ¿habríamos de dejar en la escuela particular la libertad de que se desvirtuen esos principios, y que fuera el refugio y la adulteración de ellos, siendo así que los hemos proclamado como necesarios?

¿Qué exijimos entonces al maestro particular?

Desde luego, no exijimos nada que sea nuevo.

La disposición que contiene este artículo existe en Europa, existe en las naciones mas antiguas, en España, en Francia, en todas las naciones europeas. A nosotros nos sorprenden estas cosas, porque es la primera vez que las discutimos: lo que es viejo en el mundo, nos sorprende como una cosa recién inventada.

Las garantías de la educación pública, son ademas garantías que corresponden al poder público y que debe tomar necesariamente en toda escuela que esté bajo la vijilancia del público, sea oficial, sea particular.

Ahora, ¿en qué consiste la diferencia entre la escuela pública y la escuela particular?

Sencillamente en esto: en que, en la escuela particular, la autoridad pública no tiene derecho de intervenir para saber con que programa se enseña en esas escuelas, con que método se enseña, ni cuales son los ramos de esa enseñanza. La autoridad pública se satisface con que se dé el minimum de la enseñanza que ella exige para la enseñanza pública.

Hé ahí la libertad de enseñar consagrada al maestro.

Y al señor Diputado que lo veo sonreirse de cierta manera, lo pondré en el secreto: allí se puede enseñar la religion que quieran los padres: no interviene la autoridad.

De manera que hasta allí vá nuestra libertad: todo eso se puede enseñar, sin que intervenga la autoridad; pero la autoridad tiene el derecho de exigir que el maestro que enseña, sea maestro; y si no lo es, que se ponga en las condiciones del maestro. Y para que no se nos invoque que atacamos lo existente, damos el término de un año para que los maestros actuales se pongan en las condiciones de la ley; y si no quieren dar exámen, que pongan un maestro al frente de su establecimiento. No les exigimos otra cosa.

Y no veo, señor Presidente, porque no se ha de exigir para el ejercicio de una profesión pública como esta, las condiciones que se exigen para curar, para vender medicamentos, para medir tierras, para ejercer la

profesion de abogado, de escribano, de procurador y para cien profesiones sociales. No veo porque no se han de exigir tambien para el maestro.

No quiero prolongar mas el debate, y, por consiguiente, me limito á hacer estas breves consideraciones para fundar el artículo que veo que tiene alguna oposicion.

Sr. Argentó—Los padres de familia que quieran ser ellos mismos los maestros de sus hijos, tendran que ser maestros?

Sr. Leguizamón (O.)—No señor; nos referimos á la escuela pública, á un establecimiento público.

—Se lee el art. 68.

—Se vota en la forma leida y resulta negativa.

Sr. Leguizamón (O.)—Yo pediria que se rectificase la votacion, haciendo poner de pié á los que han votado en contra.

—Puestos de pié los señores Diputados que habian votado por la negativa, dá el mismo resultado la votacion.

Sr. Ruiz de los Llanos—Parece que es inútil leer el artículo 69; queda suprimido necesariamente.

—Se lee el art. 69.

—Votado resulta rechazado.

—Se lee el art. 70.

Sr. Ruiz de los Llanos—Debe decirse: «Los directores ó maestros particulares tienen los siguientes deberes.»

Sr. Secretario—(Lee).

Ellos tienen además los siguientes deberes: Manifestar al Presidente del Concejo Escolar del distrito su propósito de establecer ó mantener una escuela.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido la palabra.

Para indicar que se ponga, en el encabezamiento de este artículo, la forma que habia propuesto antes; porque no puede quedar así, desde que supone la sancion de artículos anteriores.

Suprimiendo esos artículos, es preciso empezar diciendo: *Los maestros primarios tienen los siguientes deberes.*

Sr. Gallo (D.)—De acuerdo con la supresion de los artículos, habria que suprimir el inciso 2º de este.

Sr. Leguizamón (O.)—¿De manera que el señor Diputado no quiere ni exigir siquiera la condicion de ser el maestro moral, sano de cuerpo ó de espíritu? ¿Ni quiere exigir tampoco que sepa hablar el idioma del país?

Sr. Gallo (D.)—Quiero la supresion del inciso 2º, que dice simplemente lo siguiente: *acompañar á la manifestacion anterior los títulos de capacidad legal.*

Sr. Leguizamón (O.)—Pero se refiere á todo esto.

Sr. Gallo (D.)—*Capacidad legal*, solo

puede comprender el título de maestro, que exigen los artículos 68 ó 69.

Sr. Leguizamon (O.)—Capacidad legal, es todo lo que exige el artículo 24: capacidad moral y física.

Sr. Figueroa (F. C.)—Es que á la capacidad moral se refiere el inciso 5º que dice «Someterse á la inspeccion que en interés de la enseñanza obligatoria, de la moralidad y de la higiene pueden practicar, cuando lo crean conveniente, los inspectores de las escuelas primarias y el concejo escolar de distrito».

Sr. Leguizamon (O.)—De la moralidad de la escuela, y no del maestro.

Sr. Figueroa (F. C.)—El maestro forma tambien parte de la escuela.

Sr. Presidente—Se votará el inciso 2º, dándose por aprobados los demas.

Sr. Demaria—Deseo objetar el inciso 6º.

El inciso 6º dice que las escuelas particulares estan en la obligacion de dar el minimum de la enseñanza obligatoria establecida en el artículo 6º.

Me parece, señor Presidente, que para que la Cámara sea consecuente con la votacion anterior, respecto de lo que se ha resuelto sobre los maestros, debe eliminar este inciso de la ley.

Si hay una persona que tiene aptitudes bastantes para enseñar ciertas nociones, y carece de aquellas que son indispensables para enseñar todos los ramos á que se refiere el minimum de enseñanza establecida en esta ley, encuentro que no hay razon para obligar á esa persona á que no enseñe aquello que puede enseñar.

Ademas de ser esto un ataque á la libertad que tienen todos, y que se ha hecho valer ya,—á propósito del artículo rechazado—para enseñar, hay una restriccion del principio constitucional, puesto que se obliga á que solo se enseñe tales materias y no tales otras; y hay tambien otra razon, que es de conveniencia, que es práctica: lo que necesita sobre todo la República, es que sus hijos tengan alguna ilustracion, ya que no es posible que puedan tener toda la ilustracion deseable; y es necesario, por consiguiente, que concurran tambien las escuelas particulares á esta educacion primaria, en aquello que les sea posible.

Estableciendo este artículo en la ley, se impide, pues, que se introduzca esta parte de beneficio en la enseñanza por aquellas personas que puedan hacerlo, aunque no en la forma en que se dá en las escuelas comunes, y se coarta la libertad de enseñanza establecida por la Constitucion; se restringe este derecho, y por consiguiente, deja esta ley de tener

toda la liberalidad que le quieren dar los autores del proyecto.

Sr. Leguizamon (O.)—Pido la palabra.

Comenzaré por las últimas palabras del señor Diputado, felicitándole por pretender ser mas liberal que nosotros....

Sr. Argento—Lo somos!

Sr. Enciso—Pero no parece

Sr. Leguizamon (O.)—...Desde que nos hace un reproche de inconsecuencia.

Sr. Demaria—Yo jamas he pretendido tener nada mejor que el señor Diputado.

Sr. Leguizamon (O.)—No, no hablo de mejor.

Me parece que el señor Diputado no me ha entendido, ó no ha comprendido bien el inciso 6º.

El inciso 6º solo obliga á las escuelas particulares á dar el minimum de la enseñanza obligatoria....

Sr. Demaria—Es delo que me he ocupado: pretendo que se enseñe lo que se quiera.

Si hay una persona que se encuentra apta para enseñar á leer y escribir, ¿se le ha de privar enseñar á leer y escribir, obligándola á enseñar aritmética y todas las cosas que aqui se establece?

Sr. Leguizamon (O.)—No se si he entendido mal el proyecto presentado por el señor Diputado, pero creo que esta cláusula está en los términos de ese proyecto.

«La instruccion primaria,» decia el proyecto del señor Diputado en que establecia el minimum de la enseñanza, «la instruccion primaria se dará en las escuelas á que se refiere el artículo segundo, en establecimientos particulares ó en el domicilio de los niños.»

Habiendo establecido el proyecto que fué rechazado un minimum de enseñanza obligatoria, y prescribiendo que ella debia ser completa en las escuelas públicas, en las escuelas particulares ó en el hogar de los niños, no comprendo como se pretende, ahora, dejar á las escuelas particulares en libertad de enseñar lo que quieran, desde que se permite cumplir la obligacion escolar, dentro de determinados ramos, en las escuelas particulares.

Sr. Demaria—Perdóneme; á mi turno diré al señor Diputado que es él quien no ha comprendido el proyecto.

Sr. Leguizamon (O.)—¿Por qué?

Sr. Demaria—Está claro! El proyecto establece que este minimum de enseñanza, estan obligados los padres á procurar á sus hijos; pero no establece que estan obligados á procurárselo en una misma escuela.

Por ese proyecto puede un padre mandar á sus hijos á una escuela, en la cual solo le enseñen á leer; despues sacarlo de ahí, y pasarlo á otra, en que le enseñen otros ramos.

El mínimun de enseñanza se refiere á las escuelas públicas, no á las particulares. La ley lo dice terminantemente.

Sr. Leguizamon (O.)—Vuelvo á usar de la palabra.

Me parece que ha de ser difícil al señor Diputado demostrar que haya ningun padre tan original para que mande sucesivamente á sus hijos á veinte escuelas diferentes!

Sr. Demaria—Acabo de decir al señor Diputado que el caso no se presentaria, en la práctica, pero que no se impide en el proyecto. Un padre *puede* mandar, he dicho, sus hijos á varias escuelas sucesivamente.

Sr. Leguizamon (O.)—Pero vuelvo á nuestro proyecto.

Hemos establecido, en la ley sancionada, un mínimun de enseñanza obligatoria; ese mínimun de enseñanza puede cumplirse en la escuela pública, en la escuela particular ó en el hogar de los niños.

Respecto de la escuela pública, no hay cuestion; tiene la obligacion de dar por lo menos ese mínimun de enseñanza obligatoria.

Respecto de la escuela particular, establecemos lo mismo: por lo menos debe dar el mínimun de enseñanza obligatoria. De lo contrario, no se comprende que haya ningun interés en proteger establecimientos que no se sometiesen ni á este mínimun exigido por la ley, en materia de enseñanza.

No hay, digo, ningun interés en proteger la enseñanza en esos establecimientos particulares, si no se permite....

Sr. Demaria—¡Pero como ha de haber! ¿Prefiere el señor Diputado, entonces, que haya en la República niños que no sepan nada, á que haya niños que sepan algo?

Sr. Leguizamon (O.)—No es ese el argumento que debe hacer el señor Diputado.

Sr. Demaria—Esa es la consecuencia.

Sr. Leguizamon (O.)—El argumento que debe hacerme el señor Diputado es, si yo creo que haya escuela donde no se enseñe; y yo contestaria categóricamente al señor Diputado á este respecto: que por mas atrasado que me supusiera como hombre público, no aceptaria nunca una ley que importase sostener que un hombre que no supiera los ramos de la enseñanza, que no conociera el idioma del país, que un maestro empirico, en fin, fuera capaz de abrir una escuela pública.

Sr. Demaria—Eso ha sido ya resuelto.

Sr. Leguizamon (O.)—Eso es á lo que yo contesto.

Sr. Demaria—No es pertinente.

Sr. Leguizamon (O.)—Perfectamente pertinente.

Sr. Demaria—El señor Diputado conoce en Buenos Aires una porcion de escuelas de

niños en donde no se enseña el mínimun que establece este proyecto. Y la consecuencia que tendria el señor Diputado seria esta: que esas escuelas, por ser malas, deberian cerrarse, y se cerrarian mañana si este artículo se sancionase.

Seria esto un perjuicio para el país, porque es preferible que existan esas escuelas, aunque no se enseñe en ellas el mínimun de enseñanza, á que dejen de existir.

—Se pone á votacion el inciso 1º y es aprobado. El 2º es rechazado, y aprobados los siguientes: 3º, 4º, 5º y 6º.

—Los artículos 71 y 72 pasan sin observacion.

—Se entra á la consideracion del Capítulo IX. Disposiciones complementarias, aprobándose los artículos 73, 74 y 75.

—Se da lectura del 76.

Sr. Demaria—Pido la palabra.

Para suplicar al señor Diputado autor del proyecto que tenga la bondad de explicarme qué consejeros seran estos que figuran en la última parte del artículo.

Sr. Leguizamon (O.)—(Leyendo.) «Los jueces darán participacion al Concejo Nacional de Educacion en todo asunto que por cualquier motivo afectase el tesoro comun de las escuelas.»

A los efectos de esta prescripcion, y por la probable necesidad de gestionar ante los jueces los intereses de las escuelas, el Concejo Nacional de Educacion podrá nombrar procuradores y *consejeros legales* permanentes, que seran pagados por el tesoro de las escuelas, por mes ó por año.

La palabra consejero legal lo dice: un abogado.

Sr. Demaria—Me parece mas claro poner abogado.

Sr. Leguizamon (O.)—Como quiera.

La palabra *consejero legal* es perfectamente admitida,

Sr. Demaria—No es lo mismo, porque consejero legal puede ser un simple doctor sin ser abogado; y en este caso debe ser abogado.

Sr. Leguizamon (O.)—Hoy ya no hay doctores sin ser abogados; al contrario son abogados antes de ser doctores.

Sr. Demaria—Iba á proponer ademas otra modificacion.

Por la redaccion del artículo, los procuradores deben tambien tener conocimientos de derecho, porque dice *procuradores y consejeros legales*; estan unidas ambas palabras por la partícula y.

Por otra parte, estos procuradores y consejeros no deben ser con carácter permanente.

Si bien esto es conveniente en ciertos casos, es imposibilitar al Concejo, para el nombramiento de otros procuradores y aún aboga-

dos que sea inconveniente que lleven este carácter de permanentes.

Sr. Leguizamón (O.)—Pero fíjese que es facultativo ese nombramiento.

Es con objeto de darle la facultad de tener esos consejeros permanentes, en vez de ponerles, como proponía el señor Diputado, un tanto por ciento, que no nos ha parecido propio.

Sr. Demaria—Iba á entrar en eso. Lo demostraría al señor Diputado que es mejor lo segundo que indica.

Sin embargo, deseo solamente hacer notar esto.

Por este artículo, si bien es cierto, como dice el señor Diputado, que se dá facultad al Concejo para nombrar estos procuradores y consejeros legales con carácter permanente, no se le dá facultad para nombrarlos en otra forma.

Y esto es lo que creo inconveniente.

Tal vez el espíritu del artículo sea otro, y yo lo entiendo mal; pero es lo que dice su redacción.

Y con un caso práctico me parece que haré mas sensible mi pensamiento.

Se presenta en una colonia el caso en que el Concejo tenga algun interés que gestionar

ante la respectiva autoridad nacional. No podrá hacerlo sino por medio de un procurador de carácter permanente de aquella localidad (pues no podrá nombrar uno espresamente para ese caso) y, tanto, una vez terminado ese asunto, es probable que no se presente otro, y que, por consiguiente, no necesite de sus trabajos.

Yo propongo, pues quitar la palabra *permanentes*, y poner *procuradores y abogados*.

Sr. Leguizamón (O.)—Esa palabra ha sido puesta con perfecta inteligencia de lo que se trata.

No se quiere dejar al Concejo la facultad de tener cuantos abogados quiera, pagados á su voluntad. Se quiere que sean abogados y procuradores permanentes con un sueldo, para que el Congreso, al sancionar el presupuesto del Concejo sepa en lo que emplea sus fondos.

Pero no haré cuestion.

Sr. Presidente—El señor Diputado ¿acepta la modificación?

Sr. Leguizamón (O.)—Sí, señor.

Se vota el artículo con esa supresión, y resulta afirmativa.

—Son tambien aprobados los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82, que es de forma.

Acto continuo, se levanta la sesión.

Son las 11 y 45 p. m.

31ª Sesión ordinaria del 25 de Julio de 1883

Presidencia del Dr. Ruiz de los Llanos

SUMARIO—Asuntos entrados—Se concede permiso al Sr. Presidente de la Cámara para aceptar una comisión del Poder Ejecutivo y licencia para faltar á las sesiones—Incidente sobre integración de las Comisiones de Legislación y Auxiliar de Presupuesto—Se resuelve pedir al Poder Ejecutivo la remisión de los estudios practicados para el establecimiento de un ferro-carril de la estación Roreo á las Provincias de la Rioja y Catamarca—Aprobación del dictámen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley mandando practicar estudios para la construcción de un puente sobre el río Dulce, frente á la ciudad de Santiago del Estero—Aprobación del dictámen de la misma Comisión en el proyecto de ley mandando practicar estudios para represar el agua en el Portezuelo (Provincia de la Rioja)—Se resuelve postergar hasta la próxima sesión, la consideración del dictámen de la Comisión de Hacienda, en el proyecto de ley, en revisión, sobre conversión de la deuda pública—Aprobación del dictámen de la Comisión de Obras Públicas, en el proyecto de ley, en revisión, sobre construcción de un canal y dique en el puerto de la Atalaya (Provincia de Buenos Aires)—Aprobación del dictámen de la misma Comisión, en el proyecto de ley sobre construcción de un edificio para la escuela normal de maestros de la Capital—Aprobación del dictámen de la Comisión de Legislación en el proyecto de ley sobre nombramiento de empleados judiciales de la Capital.

PRESENTES

Achával Rodríguez
Albarracín

En Buenos Aires, á 25 de Julio de 1883
reunidos en su Sala de Sesiones los señores Diputados inscriptos al margen, el señor Presidente declara abierta la sesión.

Araujo
Arigós
Arjento
Avellaneda

ACTA

—Se lee y aprueba sin observación la de la sesión anterior.